

³⁵ Scenna, Miguel Angel, "Los Militares", Ed. de Belgrano, Bs. As., 1980, pág. 229.

³⁶ Jauretche, Arturo, citado por Galasso, en "Vida de Scalabrini Ortiz", pág. 456.

³⁷ Scenna, Miguel Angel, *op. cit.*, pág. 230.

³⁸ Esta versión de los hechos fue proporcionada al autor por Fermín Chávez, en entrevista personal, el 4/1/84.

³⁹ Senén González, Santiago, *op. cit.*, pág. 77.

⁴⁰ Scenna, Miguel Angel, *op. cit.*, pág. 219.

⁴¹ Rouquié, Alain, *op. cit.*, pág. 82.

IV

1953

El Partido Socialista de la Revolución Nacional

En los primeros meses de 1953, el ala disidente del viejo tronco socialista —escindida a partir de la entrevista entre Enrique Dickman y Perón ocurrida en febrero de 1952— da origen al Partido Socialista de la Revolución Nacional, que contará con el apoyo del gobierno.

Son discutibles los motivos que llevaron a Perón a buscar la adhesión de un sector desprendido de la izquierda tradicional, que procuraba reinterpretar al peronismo. Algunos creyeron ver una maniobra de tipo divisionista o un intento de contar con una izquierda "oficialista" y controlada. Otros —como es el caso de Abelardo Ramos, que participó de aquel grupo— interpretaron que Perón trató de producir una especie de corriente renovadora y vivificante, capaz de romper con la chatura ideológica de la burocracia que lo rodeaba. Era evidente que el peronismo necesitaba consolidarse ideológicamente, promoviendo el debate en ese terreno, a fin de depurar sus propias filas de las burocracias frenadoras, y retomar con mayor profundidad las tareas de la Revolución Nacional. Claro que la estructura del partido no resultaría muy permeable al intento. "En una desesperada tentativa de salvar su régimen —apunta Ramos— Perón abrió a último momento la posibilidad de dialogar con los escasos elementos de izquierda que apoyaban algunos aspectos de su política. De esta manera nació el Partido Socialista de la Revolución Nacional, aunque trabado por el burocratismo y la dependencia del borlenghismo"¹.

No obstante esas limitaciones, la experiencia resultaría interesante y se constituiría en un antecedente valioso desde el punto de vista ideológico. Era un intento de reinterpretación del peronismo —que la izquierda tradicional había confundido con el fascismo— como movimiento nacional y popular propio de un país dependiente, así como del papel de la misma izquierda frente a la prioritaria cuestión nacional y a la necesidad de alianza antiimperialista con sectores de la burguesía.

“Allí confluyen, entonces, antiguos socialistas que empiezan a comprender al peronismo como Enrique Dickman, Joaquín Coca, Oriente Cavallieri, Juan Unamuno y Carlos María Bravo, entre otros...”². También hay hombres que vienen de la incipiente izquierda nacional, como Enrique Rivera, Jorge Abelardo Ramos, Jorge Eneas Spilimbergo, y trostkistas como Nahuel Moreno o Esteban Rey.

Al año siguiente, Perón dará su respaldo al nuevo grupo mediante una carta publicada en el diario *Democracia*.

Al producirse, en abril de 1954, las elecciones legislativas, el partido participará de las mismas presentando candidatos en cinco distritos. Los resultados serán auspiciosos, pues obtendrá alrededor de 100.000 votos. Tal caudal electoral, muy considerable para un pequeño partido de reciente formación, resulta pasible de más de una interpretación. Se puede pensar que existía ya un espacio político importante para una izquierda enraizada en el campo nacional, independiente del peronismo y capaz de profundizar sus banderas revolucionarias. También puede suponerse —tal vez con más fundamento— que en el peronismo se había acentuado la disconformidad frente al crecimiento de la burocracia partidaria, y al vuelco “moderador” de la política económica. Tal vez muchos peronistas inquietos por esas manifestaciones de parálisis, procuraban introducir elementos “dinamizantes” a través de la presencia de legisladores socialistas, teniendo en cuenta el escaso espacio que el partido gobernante ofrecía para el ejercicio autocrítico.

No obstante, la heterogénea composición del grupo dificultará la coherencia de su accionar, impidiendo que se consolide. De todas formas, el partido subsistirá hasta ser disuelto en 1955 —junto al peronismo— por la Revolución Libertadora. En ese lapso alcanzará —a través de diversos pronunciamientos— a marcar algunas posiciones, así como a señalar muchas de las tareas pendientes en el camino de la Revolución Nacional. Así, el Centro Manuel Ugarte de Capital Federal propon-

drá, entre otras cosas, la expropiación de la oligarquía y la nacionalización del capital imperialista. En agosto de 1955, en un congreso del P.S.R.N. se afirmaba: “La Revolución Nacional debe llegar al campo y debe realizar la Reforma Agraria, mediante la nacionalización del latifundio, entrega de la tierra parcelada a los trabajadores, ya sea individualmente o en grupos, con el apoyo del Estado. Dicha nacionalización debe comprender las estancias, baluarte de una clase predispuesta a la entrega de la economía al invasor”³.

El peronismo no se decidiría a transitar ese camino. Si el IAPI había servido —en los primeros años— para expropiar una parte de la “renta diferencial” sobre la que se fundaba el poder económico de la oligarquía, no alcanzaría en cambio para desmontar ese poder. Acaso fincara allí alguna de las claves de su debilidad frente al embate final de sus adversarios.

El Segundo Plan Quinquenal

En el año 1953 entró en vigencia el Segundo Plan Quinquenal, anunciado por Perón al Congreso en el mes de diciembre de 1952.

Los intentos del peronismo por basar su acción económica en una planificación previa —expresados en los planes 1947-1951 y 1953-1957— fueron motivo de nutridas críticas. Sin embargo, y más allá de las debilidades técnicas o instrumentales que puedan atribuirse a esas tentativas— es preciso admitir que se trató de iniciativas precursoras en la materia. “Si bien es cierto que antes de la Segunda Guerra Mundial ya había existido un plan hexenal mexicano, en 1933; un plan quinquenal turco en 1934 y los célebres planes quinquenales de Stalin, los planes económicos y sociales sólo se convirtieron en reconocidos instrumentos de la política de desarrollo hacia fines de la década del 40. Perón tiene el mérito de haber sido uno de los primeros estadistas del Tercer Mundo que reconocieron la importancia de tal instrumento y lo utilizaron en beneficio de su país”⁴. Era, de algún modo, la expresión de una nueva voluntad política, ausente hasta entonces en un país que había modelado su estructura productiva a impulsos de los mercados externos. Se trataba de recuperar para la Nación el derecho a definir su perfil socioeconómico a partir de una decisión soberana.

Del Primer Plan Quinquenal, se había criticado la endeblez de sus previsiones, la falta de armonización entre objetivos e instrumentos, como también la escasa coordinación entre los diversos proyectos incluidos. Se

le adjudicó un carácter excesivamente voluntarista y falta de ajuste a la realidad. Sin embargo, y no obstante el cumplimiento parcial de sus metas, había servido como punto de partida de muchas de las más importantes iniciativas del peronismo en materia económica, que permitieron transformar la estructura heredada.

Desde el punto de vista técnico, el Segundo Plan Quinquenal resultó más ajustado y cuidadoso que el primero. "La diligencia con que el gobierno lo difundió, y los medios propagandísticos a que se recurrió para su promoción fueron muy superiores a los que mereció el Primer Plan Quinquenal, pues la intención era que este nuevo Plan sirviera de hilo conductor para la acción pública y privada en el transcurso del siguiente lustro. Realmente había sido considerablemente perfeccionado si se lo compara con el anterior. En primer lugar se caracterizaba por una mayor coherencia de las distintas partes y por una mejor armonización de éstas. Permitía reconocer claras prioridades entre los objetivos perseguidos por el gobierno"⁵.

Pero la diferencia fundamental estribaba en la concepción de fondo que lo animaba. La crisis del sector externo que alcanzó su punto álgido en 1952, había servido para desnudar las falencias estructurales que persistían en la economía argentina. El crecimiento y la diversificación industrial producidos en los primeros años de gobierno, de algún modo, habían actualizado tales carencias. Resultaba evidente que la infraestructura energética, así como las industrias básicas, no habían registrado un desarrollo acorde con el del resto de la economía. Si la Argentina ya no dependía del abastecimiento externo de bienes de consumo para la satisfacción de una demanda interna considerablemente ampliada, esa dependencia se había trasladado a los combustibles, los bienes de capital, los insumos y las materias primas que la diversificación industrial requería.

El mantenimiento de los niveles de ocupación y actividad alcanzados —resentidos por la crisis, y cuya recuperación se procuraba— requerían, pues, la ruptura de esa otra dependencia mediante la consolidación de una firme base infraestructural, capaz de conjurar el riesgo previsible de una nueva coyuntura crítica, y de lanzar al país hacia un desarrollo integrado de su estructura productiva. "Si renunciáramos a crear en el Segundo Plan Quinquenal una industria pesada para el país, habríamos renunciado a la industria, no a la industria pesada", declaraba Perón en el Congreso Industrial de 1953⁶.

En realidad, y según lo señala con acierto Antonio

Cafiero, la economía argentina atravesaba por lo que puede denominarse "crisis de desarrollo". "Estas crisis —apunta Cafiero— no pueden identificarse, en su patología, con las típicas de los países altamente industrializados o con las que caracterizaron la evolución de nuestra economía colonial... Las 'crisis de desarrollo' ... son peculiares a los países que evolucionan de un tipo de economía primitiva (monoproductiva) a una integrada (agro-industrial) o sea que extienden verticalmente la dimensión de sus economías, a diferencia del crecimiento 'horizontal' como denominamos el que se produce por el avance hipertrófico o uniforme de una actividad, por ejemplo, la extensión continua de la producción primaria, tal como ocurrió en nuestro país desde principios del siglo hasta los años 30"⁷.

El plan estabilizador de 1952, sólo se había propuesto superar la coyuntura: atravesar la crisis de pagos externos y morigerar la escala inflacionaria desatada por la sostenida expansión de los medios de pago y el consumo frente a una oferta estancada por la imposibilidad de equipamiento industrial. No había tenido otra ambición, y había recurrido a un instrumental relativamente ortodoxo, que combinado con la capacidad de convocatoria del gobierno, reveló una aceptable eficacia: la inflación se desaceleraba y la situación del sector externo tendía a mejorar.

Pero el Plan Quinquenal se proponía objetivos más importantes, que hacían a la modificación de aspectos estructurales de la economía.

Ello se desprende fácilmente de un somero análisis de las prioridades fijadas. Por lo demás, su estrategia se complementaba con la modificación de la ley de inversiones extranjeras —que procuraba flexibilizar las condiciones de las nuevas radicaciones, en procura de un estímulo para las mismas— y con otras medidas de corte "privatista", que parecían configurar un neto cambio de rumbo con respecto a las orientaciones fuertemente estatizantes de los comienzos. En general, se ha considerado que el peronismo renunciaba a las herramientas de política económica que —como el IAPI y las nacionalizaciones— habían evidenciado un fuerte poder transformador, para sustituirlas por medidas más moderadas y convencionales, y para conceder un papel más importante al sector privado de la economía.

En defensa de esa suerte de giro "desarrollista" que el peronismo comenzaba a transitar, suele argumentarse que las posibilidades de crecimiento interno de las fuerzas económicas estaban agotadas en los marcos de la estructura existente, y que ya no quedaba margen para nuevas transferencias de ingresos dentro de la

economía. Debía, pues, darse un salto cualitativo que modificara la estructura para que continuara expandiéndose. Para ello se requería un intenso esfuerzo de capitalización, para el que el ahorro interno se juzgaba insuficiente, desde que las nuevas industrias a desarrollar exigían una más elevada densidad de tecnología e inversión.

La discusión acerca de si existían otras alternativas para producir ese salto, era posible. Pero sin duda, el peronismo —aún retrocediendo en muchos aspectos de su inicial nacionalismo económico— no renunciaba a sus declarados objetivos de afianzar la independencia económica del país. En la medida en que se trazaba un estricto orden de prioridades en el destino de las inversiones y se procuraban echar las bases para el desarrollo de la industria pesada, esa finalidad permanecía vigente.

El Plan Quinquenal —promulgado mediante la Ley 14.184— se encontraba dividido en capítulos en los que se diseñaban las políticas para las distintas áreas.

La declaración de los objetivos fundamentales estaba explicitada en el artículo 2 de la Ley, que decía: “Fi- jase como objetivo fundamental para el gobierno, el Estado y el pueblo argentino, para el Segundo Plan Quinquenal: consolidar la independencia económica para asegurar la justicia social y mantener la soberanía política”⁸.

En el capítulo XVII del Plan, referido a la industria, se establecían las prioridades en materia económico-social: “La producción industrial del país será auspiciada, promovida y apoyada por el Estado en orden al cumplimiento de los objetivos del presente plan y particularmente en la medida en que se relacionen con las actividades básicas del país, que se indican a continuación y en la misma escala de prioridades económico-sociales: a) Desarrollo de la producción energética; b) mecanización y perfeccionamiento de las actividades agropecuarias; c) exploraciones y explotaciones mineras y beneficios de minerales; d) mantenimiento y reequipamiento de las instalaciones y elementos productivos existentes; e) industrias vinculadas al plan de transportes y comunicaciones; f) industrias vinculadas a la construcción de viviendas”⁹.

A su vez, el orden de prioridades en materia industrial propiamente dicha establecía: 1) siderurgia; 2) metalurgia; 3) aluminio; 4) química; 5) mecánica; 6) eléctrica; 7) construcción; 8) forestales; 9) textiles y cuero; 10) alimentaria¹⁰.

Resultaba evidente el énfasis puesto en materia agropecuaria (tendiente a mejorar las exportaciones y,

consecuentemente, la capacidad de importación del país), los recursos energéticos y las industrias pesada y minera. En cuanto al agro, se introducía una modificación importante, que tendía a estimular el aumento de la producción: la aplicación del impuesto a los réditos se determinaría en función de la productividad media del predio, y no sobre la renta real según se había hecho antes. Así se castigaría fiscalmente a quienes explotaban mal sus propiedades rurales, beneficiándose a los que lo hicieran eficazmente.

La misma preocupación por consolidar la infraestructura se advertía en la asignación de las inversiones estatales para el periodo 1953-57, fijada en el capítulo XXX. El 42,5 % del total se destinaba a “obras y servicios públicos”, y el 32,48 % a “acción económica”, en tanto que la “acción social” sólo participaba en un 4,2 %¹¹.

Del total de la inversión asignada, que ascendía a 33.500 millones de pesos, 4.600 millones correspondían a combustibles, 2.500 millones a energía eléctrica, 5.000 millones a transportes, 3.500 a vialidad y 2.215 a comunicaciones.

Mientras los distintos rubros energéticos recibían una asignación de 7.900 millones y la infraestructura de transportes y comunicaciones superaba los 11.700, los gastos militares totalizaban 4.000 millones y la acción social —relevante en años anteriores— no llegaba a 1.400 millones¹².

Se advertía una debilidad del plan en cuanto a la inversión estatal en siderurgia y metalurgia, que no preveía más de 980 millones. Si se tiene en cuenta que este rubro estaba especialmente contemplado en el orden de prioridades explicitado en materia industrial, se concluye que se encaraba desde una óptica privatista¹³, aún cuando el desarrollo siderúrgico debía descansar —en buena medida— en la acción de SOMISA, creada en 1947 y que tenía una participación estatal del 90 %.

En cuanto a la proveniencia de los recursos destinados a la financiación del Segundo Plan Quinquenal, se encontraba establecida en el mismo capítulo XXX. El grueso —20.500 millones— debía salir de la negociación de títulos de la deuda pública, completándose con el producido de diversos impuestos. Sin embargo, y aunque esta previsión —para algunos en exceso optimista— suponía que el Estado crearía los fondos necesarios para financiar el Plan, “...el texto incorporaba el concepto de que podía atraerse al capital privado, tanto interno como externo, para cooperar en la puesta en marcha del Plan”¹⁴. Justamente, este último

aspecto estaría relacionado con la modificación a la Ley de Inversiones Extranjeras, que se llevaría a cabo en el mes de agosto de 1952.

El problema de las carnes y el escándalo Duarte

La lenta recuperación económica que se insinuaba en los primeros meses de 1953, no se acompañaría de una mejoría similar en el plano político. En realidad, todo 1953 sería un año plagado de dificultades.

En el mes de abril estallarían sucesos que adquirirían ribetes de escándalo: Juan Duarte —hermano de Eva y secretario privado del presidente— debió renunciar a su cargo tras hallársele implicado en un negociado relacionado con la comercialización de carnes en Buenos Aires. También resultó involucrado Orlando Bertolini —cuñado de Duarte— y otros funcionarios de la Casa de Gobierno.

La investigación sobre los hechos había sido ordenada por el mismo Perón, ante la ola de rumores y trascendidos, que creaban un clima de inquietud y desprestigio. La misma CGT, pocos días antes, había hecho oír sus protestas por la escasez de carne y el rápido aumento de precios de los alimentos, insinuando que algunos funcionarios del gobierno no eran ajenos a tales problemas. La primera reacción de Perón ante esas protestas —que daban fundamento a la oposición en sus acusaciones de corrupción oficial— fue convocar a una reunión del gabinete económico, el comité nacional de precios y salarios, la CGT y la CGE, con el fin de acordar soluciones al desabastecimiento. Allí, se comprometió personalmente a zanjar la cuestión, castigando a los responsables de la escasez de carne: “Aunque sea voy a carnear en la avenida General Paz y voy a repartir carne gratis, si es necesario. La pagarán los que no han sabido cumplir con su deber de abastecedores”, amenazó¹⁵. Pareció que Perón eludía así el tema de la corrupción oficial. Sin embargo, inmediatamente, facultó al general León Bengoa para que iniciara una investigación sobre las corruptelas de las que se hacía eco la opinión pública. El 6 de abril, la comisión integrada al efecto, inició sus tareas. Duarte fue ese mismo día apartado de su cargo, y se le prohibió la entrada a su oficina. Las tareas de investigación no tardaron en reunir evidencias probatorias de las actividades ilícitas de varios funcionarios, además de Duarte y Bertolini.

El 8 de abril, Perón habló por radio, anunciando

que se había ordenado la investigación “para establecer la responsabilidad de cada uno de los funcionarios, empezando por mí”¹⁶. En ese mismo discurso, el presidente dio muestras de nerviosismo y fatiga por la situación creada y los insistentes rumores: “Y a los señores que se encargan de esparcir rumores, sean estos enemigos del Gobierno o partidarios del Gobierno —que también los hay— que se cuiden mucho, porque si el pueblo no tiene los suficientes pantalones como para imponerse sobre los propaladores, he de tomar yo también esa función. No me va a extrañar. Hace diez años que vengo poniendo el pecho a los enemigos de adentro y a los enemigos de afuera, y yo lo he de poner mientras tenga un hálito de vida, aunque no me acompañe nadie, porque sé que cumplo con mi deber. Pero, señores, yo ya me estoy cansando. Son demasiados años de lucha y esto lo fatiga y lo cansa a cualquiera. Yo he de seguir mientras sienta el apoyo. Pero a mí no me va a pasar lo de Yrigoyen; a mí con mentiras no me van a voltear, porque me voy a ir un año antes de que me volteen, cuando no me sienta apoyado por hombres, que es lo que se necesita para esta clase de lucha”¹⁷.

Las expresiones de Perón darían lugar a la convocatoria, por parte de la CGT, a un paro general y una movilización de apoyo al gobierno, a realizarse en Plaza de Mayo el día 15 de abril.

En el interior, al día siguiente del discurso radial del Presidente, Juan Duarte apareció muerto de un balazo. La investigación policial atribuyó la causa de la muerte a un suicidio. Sin embargo, la versión de que Duarte había sido asesinado —y de que el crimen fue encubierto por las autoridades— cobró cuerpo rápidamente. El hecho —nunca bien esclarecido— sigue siendo motivo de controversias. En ese momento, el sensacionalismo que rodeó el caso sirvió para empeorar aún más la imagen del gobierno ante extensos sectores de la opinión pública.

Los hechos del 15 de abril

La muerte de Eva, sin duda, había afectado a Perón más de lo imaginable. La soledad del poder lo oprimía y el círculo de hierro de los obsecuentes no lo ayudaría a sobrellevar las dificultades que se multiplicaban. Por el contrario, los problemas exigían su intervención personal, o crecían sin solucionarse, a veces deliberadamente ocultados por quienes rodeaban al Presidente.

El poder casi absoluto que Perón parecía ejercer sobre

una organización estructurada verticalmente, acababa por limitarlo. El exceso de responsabilidades rebasaba su capacidad. Y la ausencia de colaboradores eficaces y dotados de iniciativa —por natural imperio de la personalidad de un jefe carismático, que sólo requería un séquito de aquiescentes— le imposibilitaría la delegación de funciones y decisiones en gente eficaz. Esto, aun con excepciones, sería la regla general.

La necesidad de conservar a su lado a colaboradores supuestamente "leales" le llevaría a tolerar corruptelas evidentes. Por lo demás, Perón era un político pragmático, y su sentido de la ética era —en esta materia— consonante con esa condición y por lo tanto, alejado de lo convencional. Pero la corrupción tenía —más allá de la ética— consecuencias políticas que acaso Perón no atinó a evitar, aun siendo consciente de la situación.

Todo eso afloraría en las palabras que un Perón visiblemente exasperado y cansado pronunció el 15 de abril, ante la nutrida concentración organizada por la CGT en su apoyo.

Aunque la muestra de adhesión popular pareció tonificarlo —pues se retractó de su amenaza de renuncia insinuada una semana atrás— arreció en cambio contra el círculo de "alcahuetes y aduladores" que lo flanqueaba: "Yo no soy de los hombres que se desalientan, a pesar de la legión de bienintencionados y de malintencionados que golpean permanentemente sobre mi espíritu y mi sistema nervioso. Yo no soy de los hombres que se desalientan desfilando, como lo hacen entre una legión de aduladores y una legión de alcahuetes. Si esto pudiera desalentarme, si mediante eso pudiese algún día llegar a perder la fe inquebrantable que tengo en mi pueblo, habría dejado de ser Juan Perón" ¹⁸.

Pero a los pocos minutos de iniciado el discurso presidencial, estallaron en la plaza colmada de gente dos bombas, produciéndose corridas e instantes de pánico. Perón interrumpió su mensaje, asegurando que los responsables serían identificados y entregados a la justicia. Muchas voces se elevaron en la plaza, en forma espontánea, reclamando represalias contra los autores del atentado. Enardecido ante el curso de los hechos, Perón incitó a quienes pedían venganza, a que la tomaran por sus propios medios: "Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla?" ¹⁹.

Por la noche, distintos grupos asaltaron la Casa del Pueblo, sede del Partido Socialista. El edificio fue incendiado, destruyéndose totalmente su cuantiosa biblioteca y su archivo. También se produjeron atentados semejantes contra la Casa Radical, la sede del partido

Demócrata y el edificio del Jockey Club. "Símbolo del lujo de la clase alta, el edificio del club fue pasto de las llamas, que devoraron su biblioteca y destruyeron algunos de sus valiosos cuadros..." ²⁰. Ya se trataba de acciones espontáneas cometidas por exaltados, o de operaciones planificadas, lo cierto es que la policía y los bomberos dejaron hacer, y sólo intervinieron para evitar que el fuego se propagara a edificios aledaños.

El gobierno, al día siguiente, restringiría la información al respecto, sin poder evitar que ésta se difundiera velozmente. En cualquier caso —planeadas o no— instigar a ese tipo de represalias fue un error de Perón, producto de su exasperación. Había caído en la trampa de la provocación, que no ahorra medios. Mientras el atentado en la plaza cobraba seis vidas y más de noventa heridos —cuyos nombres nadie recordaría—, durante mucho tiempo se hablaría del "vandalismo" que había costado la pérdida de bienes materiales valiosos e irrecuperables... Si el peronismo manejaba el aparato propagandístico a través de los medios oficiales a su disposición, buena parte de la opinión pública "sana y culta" se mostraría mucho más permeable a ciertas interpretaciones más ligadas a sus propias y arraigadas categorías conceptuales: se habían destruido por el fuego libros y cuadros, ¡se había atentado contra la cultura...! No cabía, pues, una muestra más acabada y definitiva de la barbarie del régimen, comparable a las quemaduras de libros en la Alemania de Hitler. Era la confirmación de la "bestialidad" del "populacho": alpargatas sí, libros no... En la memoria de buena parte de la pequeña burguesía, el peronismo quedaría indisolublemente ligado a esas imágenes.

Por supuesto, la tensión con la oposición se acentuó peligrosamente. Se responsabilizó por los actos terroristas a miembros del partido Radical, y especialmente a Roque Carranza, joven militante de esa agrupación que fue detenido y permaneció preso hasta 1955, fecha en que lo sobreesó la Revolución Libertadora. Sin embargo, más tarde se establecería que la autoría del hecho corrió por cuenta de "...un grupo de jóvenes observadores, algunos de ellos miembros de distinguidas familias..." ²¹.

El gobierno endureció su actitud hacia los partidos de la oposición y muchos de sus principales dirigentes conocieron la cárcel en el mes de mayo: Arturo Frondizi, Ricardo Balbín, Nicolás Repetto, Alfredo Palacios, Adolfo Vicchi y Reynaldo Pastor, entre otros. En general, se trataba de los mismos que habían mantenido contactos con los golpistas en setiembre de 1951, por lo que se les sospechaba vinculados a los actos sediciosos.

Una cierta distensión

Sin embargo, y pese a la gravedad de lo ocurrido (la policía había descubierto que se preparaba un plan de nuevos atentados), el gobierno no se mostró dispuesto a prolongar la situación de enfrentamiento.

Tal vez la necesidad de mejorar la imagen externa de la Argentina, en momentos en que el gobierno se proponía replantear la relación con Estados Unidos —en julio llegaría al país el hermano del presidente Eisenhower— influyera en la predisposición hacia la búsqueda de una tregua política. También debe tenerse en cuenta que la nueva orientación en materia económica, requería ciertas condiciones de estabilidad política interna, en la medida en que se procuraran estimular radicaciones de capital extranjero, que difícilmente se arriesgarían en un marco de convulsión política creciente.

Ya fueran esas consideraciones las que obraron en el ánimo de Perón, o la simple comprensión de que la provocation buscaba, justamente, alimentar una intensificación de la represión que socavaría al gobierno, lo cierto es que pronto se inició una política de conciliación. La primera iniciativa no surgió del oficialismo, sino aparentemente de la oposición, pero encontró eco favorable.

“Los orígenes específicos de la política de conciliación no son del todo claros. Los comienzos públicos pueden rastrearse hacia iniciativas no tomadas por el gobierno, sino por miembros del más conservador de los grupos de la oposición, el partido Demócrata”²². Hacia fines de junio, una delegación de esa agrupación entrevistó a Angel Borlenghi —ministro del Interior— presentándole una petición en la que se solicitaba la liberación de los detenidos políticos y el levantamiento del estado de guerra interno —instituido a raíz del intento golpista en setiembre de 1951— como bases para la iniciación de una etapa de diálogo.

Por otro lado, Federico Pinedo, ex ministro de Hacienda y dirigente conservador que se encontraba en prisión, a través de una carta escrita desde su celda efectúa un llamamiento a la tregua política y a la pacificación. Proponía que el gobierno revocara el estado de guerra interno, y la oposición se abstuviera de hacer críticas a fin de evitar nuevos choques. La iniciativa recogió reacciones encontradas y polémicas, ya que ni los radicales ni los socialistas se mostraron dispuestos a establecer la tregua sobre las bases propuestas por Pinedo, hallándolas humillantes. Sin embargo, las gestiones de los conservadores tuvieron éxito, pues muchos

de los principales miembros del partido recobraron la libertad.

Otras agrupaciones políticas, como el partido socialista disidente que lideraba Dickman y la democracia progresista, se entrevistaron también con Borlenghi y obtuvieron la liberación de otros detenidos.

No obstante la posición intransigente mantenida por radicales y socialistas del “viejo tronco”, en el mes de setiembre —y ante una nueva gestión del partido demócrata— dirigentes de esas dos agrupaciones fueron también liberados.

En el interín, el gobierno preparaba una Ley de Amnistía, que sería votada por el Congreso en el mes de setiembre de 1953.

Dicha Ley, establecía una distinción entre los delitos políticos cometidos por civiles y los que implicaban a personal militar. Los primeros recibieron una amplia amnistía por los delitos políticos en que hubieran incurrido con anterioridad a la sanción de la norma. No estaban alcanzados del mismo modo los militares, que se beneficiarían de la Ley según lo determinara el Poder Ejecutivo en cada caso. También se introducía una distinción para las transgresiones en el ámbito sindical: se favorecía a todas aquellas que fueran anteriores al 17 de octubre de 1945, en tanto que se considerarían casuísticamente las posteriores a esa fecha. La amnistía, finalmente, no alcanzaría a quienes fueran culpables de actos de “terrorismo político”.

La promulgación de la Ley, poco antes de la Navidad de 1953, posibilitó la liberación de un crecido número de detenidos, así como la pérdida de efecto de muchas órdenes de arresto contra personas que se encontraban prófugas u ocultas.

Los dirigentes de la oposición recuperaron su libertad, pero no ocurrió lo mismo con los militares implicados en los intentos golpistas de 1951 y 1952.

Sin embargo, continuó en vigencia el estado de guerra interno, cuya eliminación había sido solicitada con insistencia. Si bien ese instrumento permitía al gobierno incurrir en arbitrariedades, no podía dejar de admitirse que —en parte— estaba justificado por una casi constante actividad conspirativa. Sin desconocer que la presión sobre la oposición existía, y que el respeto por las libertades públicas no fue —en general— la preocupación fundamental de Perón, la actitud de su gobierno tras los sucesos de abril de 1953, desmiente la imagen de una dictadura represiva que se le adjudicó. Según lo admite Peter Waldmann, “... Perón sólo hizo uso de los medios represivos de control en forma muy limitada... Esta afirmación se contradice en cierta

medida con la difundida convicción de que Perón organizó un régimen eminentemente terrorista y represivo. Sin duda, nunca vaciló en aplicar todo el poder coercitivo que le confería la conducción del Estado. Lo utilizó tanto para llevar a la realidad sus ideas sobre la organización política, como para salvaguardar pura y simplemente su poder personal. Sin embargo, la coerción tuvo mucha menos importancia como medio de disciplina política en el peronismo, que en los sistemas totalitarios europeos”²³.

La política exterior y la integración latinoamericana

Durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, y en la inmediata posguerra, desde los Estados Unidos se había observado con particular desconfianza el surgimiento de movimientos de marcado sesgo nacionalista en Bolivia y Argentina. El Departamento de Estado sería hostil a esos regímenes, a los que se suponía ligados al bando derrotado en la contienda, al menos por vínculos de simpatía. Para colmo tales regímenes se mostraban a veces levantiscos ante los nuevos árbitros de la política mundial, demorando su declaración de guerra al Eje o eludiendo suscribir con la debida prontitud ciertos compromisos internacionales a gusto de las potencias triunfantes.

Sin embargo, el advenimiento de la Guerra Fría impuso un vuelco en la estrategia de Washington hacia los países sudamericanos. Resultaba necesario consolidar la presencia norteamericana en esa parte del continente, con el fin de prevenir el avance comunista. Eso llevaría a la paulatina normalización de las relaciones con el gobierno argentino.

Perón, que había suscripto con reticencia el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en 1947, lo hizo ratificar por el Congreso en 1950 ante la eventualidad de una Tercera Guerra Mundial, que en ese momento entraba en las previsiones de muchos analistas. Esa posibilidad —y la necesidad de asegurar los mercados externos para la Argentina en caso de que se materializara— llevó también al gobierno a asumir una actitud pro-occidental frente al conflicto de Corea.

El pragmatismo dominó, pues, las relaciones entre los dos países, que experimentarían aún un vuelco favorable al asumir la presidencia de los Estados Unidos Dwight Eisenhower, en 1953. La nueva administración se mostraría bien dispuesta hacia el gobierno argentino.

En el mes de julio de 1953, Milton Eisenhower, hermano del presidente norteamericano, llegó a Buenos Aires en visita oficial, estrechando el acercamiento. Esto se vincularía a la reorientación de la política económica, que contemplaba la captación de inversiones externas con el fin de promover el desarrollo de ciertos sectores de la economía, particularmente el energético.

En el marco de la Guerra Fría, el gobierno norteamericano se mostraría también proclive a alentar las iniciativas de integración entre los países sudamericanos, aunque —claro está— desde su particular óptica. “Estados Unidos presionó activa y eficientemente para consolidar el bloque americano bajo su hegemonía. Dentro del esquema geopolítico forjado en el Pentágono, el papel fundamental lo jugaba Brasil, portaaviones insubmersible para un ataque sobre el viejo continente eventualmente dominado por Rusia, sin contar con que Brasil ocupa un lugar estratégico en el Atlántico Sur. Las demás naciones latinoamericanas —Argentina entre ellas— son Estados periféricos, necesarios pero secundarios. Razón eficiente para que Brasil sea elevado al rango de satélite favorito de Washington, y por su posición central respecto de las naciones hispanohablantes se convierte en el gendarme del continente”²⁴.

Frente a esa concepción —que colocaba a Sudamérica como zona de influencia, y a Brasil como “submetrópoli”— Perón procuró aprovechar el espacio político que la aprobación norteamericana brindaba, a efectos de jugar su propia carta integrativa. Convirtiendo a la Argentina en el eje de la confluencia, la sustruía al papel subordinado que se le reservaba en los planes de Washington, y la integración cobraba otro sentido.

Justamente, una de las piezas angulares de la política latinoamericana trazada por Perón era Brasil, siendo Chile la restante. El fundamento de esa estrategia era, en buena medida, económico: “La República Argentina sola, no tiene unidad económica; Brasil solo, no tiene tampoco unidad económica; Chile solo, tampoco tiene unidad económica; pero esos tres países unidos conforman ... la unidad económica más extraordinaria del mundo entero, sobre todo para el futuro ... Es indudable que, realizada esta unión, caerán en su órbita los demás países sudamericanos” —enfaticaba Perón—²⁵. De acuerdo con esta concepción, Perón había establecido —durante su primer gobierno— contactos con Getulio Vargas y Carlos Ibáñez, futuros presidentes de Brasil y Chile. (Vargas llegó al poder en 1951 e Ibáñez en 1952). Con ambos había acordado impulsar tratados de unión económica, el primero de los cuales debía ser suscripto con Brasil. Sin embargo, difi-

cultades políticas internas —y posiblemente presiones externas— demorarían el cumplimiento de lo previsto por parte de Brasil. En vista de ello, Perón —previa comunicación a Vargas y con su anuencia— adoptó la iniciativa respecto de Chile.

Así, en febrero de 1953, Perón viajó a Chile para suscribir con el mandatario de ese país, general Carlos Ibáñez, el "Acta de Santiago", en la que establecieron las bases para la unión económica entre ambos países.

En el mes de julio del mismo año, Ibáñez se trasladó a Buenos Aires, y se firma el Tratado de Unión Económica, que hace efectivos los propósitos enunciados meses antes. El Tratado comprometía a ambas naciones a procurar la ampliación del intercambio comercial, la supresión paulatina de gravámenes y trabas, el mutuo aporte de capitales, la coordinación de esfuerzos para la industrialización, el establecimiento de líneas de financiamiento, así como la expansión de los transportes y las comunicaciones.

Sorpresivamente, el acuerdo fue recibido con duras críticas en la cancillería brasileña, en abierta contradicción con la posición asumida en los contactos extraoficiales sostenidos entre Vargas y Perón. Aparentemente, el presidente de Brasil era presa de fuerzas internas que no dominaba²⁶. Según la postura de Itamaraty, los pactos regionales destruían la unanimidad panamericana. Sin duda, pesaba en Brasil la influencia de los planes norteamericanos, que concebían la unidad continental en torno al prevalente papel de aquel país, así como la histórica "vocación hegemónica" de los grupos de poder locales.

No obstante la defección brasileña, que restaba sustento al proyecto, el gobierno argentino persistiría en impulsarlo: "Ya entonces —escribe quien se desempeñaba como canciller, Jerónimo Remorino— entendimos que era imperioso, para el destino de nuestros pueblos, alcanzar la efectiva integración de sus economías, dilatando con proyecciones continentales, la producción y comercialización de sus bienes económicos... Los acuerdos regionales, previos, era el paso obligado que deberíamos cumplir para alcanzar, en etapas de maduración y corrientes fluidas, la ansiada integración económica hemisférica. En eso estábamos; en plena tarea nos sorprendieron acontecimientos conocidos, paralizándolo esa venturosa realización"²⁷.

A partir de los celebrados en Chile, y en términos semejantes, se sucederían una serie de acuerdos. El 14/8/53 se firma en Buenos Aires el convenio de Unión Económica con Paraguay; el 12/12/53, en Quito, el Acta de Unión Económica Argentino-Ecuatoriana; el

9/9/54 en La Paz, el convenio de Unión Económica Argentino-Boliviana; el 14/12/54 en Buenos Aires, el convenio de Complementación Económica con Nicaragua. Con Brasil, sólo se logró en marzo de 1953, un convenio comercial más restringido.

En casi todos los casos, los lineamientos generales de los acuerdos incluyen la promoción del intercambio entre las partes, la disminución de derechos aduaneros —con listas de productos exentos, en algunos casos—, y la concesión de financiamiento mutuo. También, en oportunidades, se hace referencia a la concertación de políticas de inversión e industrialización.

El peronismo echaba así las bases de una política continental, que sería abandonada tras su caída del gobierno.

Resulta difícil prever los resultados que pudieron obtenerse, de haberse persistido en tales intentos. Puede pensarse que tras la política de uniones económicas, subyacían ciertos supuestos de la concepción gradualista de la integración supranacional, propia de los enfoques teóricos "funcionalistas" que inspiraron la formación del Mercado Común Europeo. Tal esquema —exitoso en Europa— supone que a partir de la paulatina integración económica, puede avanzarse hacia la integración política, pero requiere la existencia de ciertas condiciones de homogeneidad y similitud estructural entre los países implicados. La ausencia de tales condiciones, sólo puede ser suplida, en parte, por una firme voluntad política²⁸.

La posterior experiencia de ALALC —que tiene algunos puntos de contacto con los sistemas de listas de productos desgravados contempladas en los acuerdos realizados por el peronismo, según la reconociera el propio Remorino²⁹— no habla en favor de esa estrategia. Sin embargo, si se piensa que la integración es —fundamentalmente— la resultante de decisiones políticas, no puede negarse al peronismo un papel precursor en esta materia.

Por lo demás, y desde el punto de vista estrictamente económico, el sistema de convenios bilaterales que el peronismo instrumentó— no sólo con los países latinoamericanos— resultaba sumamente positivo, en tanto permitía la mutua colocación de excedentes exportables mediante cuentas cuyos saldos se cancelaban con mercancías, salvándose así las eventuales carencias de divisas. Tales intercambios fueron dejados de lado después de 1955.

La política exterior —y en particular las relaciones comerciales— se desarrollaron sin barreras ideológicas; la Argentina fue —con el peronismo— el primer país

sudamericano que se relacionó abiertamente con la Unión Soviética y demás naciones del área socialista.

La Ley de Inversiones Extranjeras

La política externa tenía, como hemos visto, más de un frente. Al mismo tiempo que se procuraban llevar adelante las uniones económicas en el ámbito continental, se buscaba mejorar las relaciones con los Estados Unidos.

Estas dos estrategias aparentemente contradictorias, encontraban su justificación en la reorientación global de la política económica. Según hemos dicho, se procuraba el desarrollo de los sectores básicos de la economía, estimándose necesario alentar la inversión extranjera para esos fines. Al mismo tiempo, la ampliación y diversificación de mercados implicada en las iniciativas integrativas, posibilitaría una mejora en la situación de la balanza comercial, así como los acuerdos de comercialización permitirían una más eficiente defensa de los precios de exportación.

El sector donde el aporte externo se estimaba más necesario era el energético. La carencia de combustibles —y la consiguiente necesidad de importación— limitaban severamente la actividad productiva. El gobierno consideraba que la única salida rápida para el problema —que exigía urgente solución— era promover la participación de capitales externos. El debate en torno a esta cuestión —que despertaba reservas en el mismo seno del peronismo— recién se plantearía más tarde, al difundirse los contratos con la California Argentina S.A.

En el mes de julio, el gobierno recibió la visita oficial de Milton Eisenhower, acompañado de varios funcionarios del Departamento de Estado, con los que se analizaron las posibilidades existentes en materia de inversiones. Aparentemente con el fin de favorecer tales perspectivas, el 14 de julio fue enviado al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Inversiones Extranjeras, que garantizaba a los nuevos inversores transferencias de ganancias de hasta un máximo del 8 % anual, y el retiro total de las inversiones, mediante cuotas, a los diez años de la radicación. Además, la Ley facultaba al Poder Ejecutivo para establecer acuerdos en materia de inversiones. Esta última cláusula fue motivo de fuerte oposición por parte de los legisladores radicales, en tanto entendían que —al no excluirse expresamente el petróleo de su ámbito— existiría la posibilidad de violar los principios contenidos en el ar-

tículo 40 de la Constitución sancionada en 1949. El mismo establecía que los recursos naturales son de propiedad original del Estado y no podrán ser enajenados por ningún concepto. “Los defensores de la medida, sin embargo, insistieron en que podían encontrarse medios para que el capital extranjero participara en la explotación del petróleo sin necesidad de sacrificar ninguno de esos principios”³⁰.

De todos modos, en el mes de agosto, la ley fue promulgada. Sus disposiciones fueron consideradas por muchos excesivamente permisiva, y poco compatibles con los principios de nacionalismo económico sustentados hasta entonces por el peronismo. Perón hacía gala, en este aspecto de un total pragmatismo a su juicio, la inversión externa podía jugar un papel importante —acelerando el desarrollo de sectores claves de la economía— con mutuo beneficio. Prescindir de ella implicaba serias demoras a ese desarrollo, así como la necesidad de imponer severos sacrificios sectoriales para la formación del ahorro interno que la sustituyera. Probablemente, en momentos en que se empeñaba en ampliar su sustento político, Perón no se sintiera con fuerzas para imponer tales cargas.

En busca de un “equilibrio” social

Juntamente con el giro “privatista” en la economía y la apertura a los inversores externos —y también en forma coincidente con la distensión política— Perón se encaminaba hacia el establecimiento de un nuevo esquema de equilibrio entre los sectores sociales, que ampliara el sustento de su gobierno.

En los primeros años, la “ecuación” de la participación —todo lo que un sector recibe, en términos relativos, debe cederlo otro— se resolvía a expensas del agro y a favor del asalariado y de la nascente burguesía de pequeños y medianos industriales. Pero quien proveía el sustento político era, prioritariamente, la clase obrera, principal beneficiaria del esquema. Ese esquema se había alterado por la crisis, que impuso restricciones y debilitó los salarios. La baja de los precios externos estrechaba las posibilidades de que el agro continuara financiando a los sectores urbanos, obreros y empresarios. Si no se lograba una rápida expansión económica, a largo plazo, difícilmente podían satisfacerse las demandas de todos los grupos, ya que en el interior de la economía, las transferencias de ingresos necesariamente habrían de perjudicar a algún sector.

Perón procuraba impulsar esa expansión, manteniendo en tanto una situación de equilibrio distributivo en el punto alcanzado. Para ello, buscaba reforzar políticamente ese equilibrio, recurriendo a acuerdos sectoriales que limitaran las demandas. Ese sentido había tenido el estímulo del gobierno a la creación de entidades representativas del empresariado, como lo fue la CGE.

La CGE (Confederación General Económica), cuyo presidente era José Gelbard, se creó a principios de 1953, y en ella convergieron sectores de pequeños y medianos industriales metropolitanos y del interior, ligados al mercado interno. La entidad trataría de ampliar su representatividad, incluyendo a otras asociaciones empresariales, y el gobierno procuraría concederle una creciente participación. "El titular de la CGE fue invitado a las reuniones de Gabinete; y la entidad misma fue considerada la representante autorizada de todo el sector privado, a pesar de la resistencia de ciertos grupos, sobre todo los ganaderos, a ser absorbidos por una organización tan abiertamente oficialista" ³¹.

En realidad, la óptica económica del empresariado nucleado en la CGE no difería sustancialmente de la que sustentaban otros sectores empresarios tradicionales —manifiestamente antiperonistas— como la UIA, la Bolsa de Comercio o la Sociedad Rural: se manifestaba en contra del dirigismo excesivo, de los precios máximos, se quejaba de los impuestos y las cargas sociales. "Incluso en lo referente a la intervención del Estado en el proceso económico, que parecería haber sido vital para la burguesía nacional, la CGE coincidía en lo esencial con la Bolsa de Comercio al declarar que las intervenciones estatales debían ser sensiblemente reducidas. Tampoco se declaraba, por principio, en contra de la instalación de industrias extranjeras en el país, ni de la importación de capitales; simplemente solicitaba que estos no entraran en competencia con las ramas de la industria local. El único punto en el cual sus ideas se apartan claramente de los puntos de vista de los círculos económicos tradicionales, es el referente a la descentralización de la estructura económica, punto sobre el cual la CGE insistía a cada paso" ³².

Pero la Sociedad Rural o la Bolsa de Comercio —que habían visto con cierto alivio los cambios en la política económica ³³— no sólo impulsaban su profundización, sino que esperaban que estos se siguieran de un cambio político que acabara con Perón y su régimen. En cambio, los hombres de la CGE, estaban dispuestos a acep-

tar el ámbito de participación ofrecido por el gobierno. Hacia fines de 1953 se formó otro grupo similar: la CGP (Confederación General de Profesionales), "...que trató de reunir asociaciones dispersas tales como las de maestros, abogados, médicos y agrónomos, integrándolas en una organización nacional directamente vinculada con el presidente. Al estimular su formación, Perón procuraba sin duda integrar en el gobierno los grupos que no pertenecían a la CGE y que no se sentían cómodos en la CGT" ³⁴.

Mediante todas estas estructuras, conjuntamente con la CGT —que no dejaba de ser el principal sustento político del gobierno—, Perón trataba de ampliar sus bases, avanzando hacia su explicitado ideal de comunidad organizada.

La estructura de un "pacto social" conformado con la participación de tales entidades intermedias, así como del gobierno en su papel de árbitro, debía servir para armonizar y limitar la puja distributiva, así como para repartir los esfuerzos en procura del crecimiento.

En ese marco se inscribiría la Ley 14.250, de Convenios Colectivos de Trabajo, sancionada el 29 de setiembre de 1953. Las convenciones colectivas se llevarían a cabo por industria, entre la entidad sindical y su similar empresarial, incluyendo la fijación de escalas de remuneración mínima obligatoria, así como de condiciones generales de trabajo. El Estado homologaría con fuerza de Ley, el convenio suscripto por las partes.

La legislación tendía, en general, a favorecer a los asalariados, al uniformar con carácter obligatorio las condiciones de remuneración y trabajo. Pero también, tendía al fortalecimiento de las entidades sindicales, en tanto disponía que "...la convención colectiva homologada será obligatoria para todos los trabajadores, afiliados o no, que se desempeñen en las actividades comprendidas en la misma dentro de la zona de aplicación ... podrá contener cláusulas que acuerden beneficios especiales en función de la afiliación a la Asociación Profesional de Trabajadores que la suscribió... y las contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participantes serán válidas, no sólo para los afiliados, sino también para los no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención..." ³⁵.

Asimismo, era de cumplimiento obligatorio para el empresario, afiliado o no a la entidad patronal firmante.

Este mecanismo, que institucionalizaba el acuerdo y procuraba el fortalecimiento de las organizaciones participantes, tenía una importancia singular en un país donde existían grandes desniveles regionales en cuanto

a remuneraciones y condiciones laborales. Muchos sectores del interior, hasta entonces marginados, se beneficiarían con él.

Sin desmedro de la mayor participación otorgada al sector empresario en las decisiones económicas, el peronismo no dejó de lado su inicial vinculación con la clase obrera. A partir de 1952 —año en que la crisis alcanzó su punto culminante— el gobierno procuraría mejorar nuevamente los salarios y observaría con particular cuidado el cumplimiento de los precios máximos, penalizando la transgresión. Asimismo, se mantendrían subsidios a los productos primarios, a fin de evitar el impacto en los precios de los alimentos producido por la mejora en el tipo de cambio concedido para la exportación.

En cuanto al empresariado rural, que había sido despojado de una parte de sus rentas durante los primeros años de gobierno, ahora se veía en una situación mucho más favorable. Si al principio —y mientras los precios internacionales fueron altos— el IAPI había obtenido diferencias a expensas del productor, esto cesó al descender los precios: "...en los años posteriores a 1951 el IAPI pagó precios que superaban considerablemente el nivel mundial de los mismos"³⁶. Asimismo, el propietario rural se benefició con la importación de maquinaria a cambio preferencial, lo que permitió pasar de un parque de 10.000 tractores en 1946 a uno de 60.000 en 1955.

especificación del campo

Sin embargo, estas mejoras no harían variar la postura adversa del empresariado rural hacia el peronismo, que en verdad, tampoco había atacado frontalmente la estructura de propiedad de la tierra. Si bien la política de congelación de arrendamientos, habilitación de nuevas tierras y créditos rurales permitió convertir a unos 25.000 arrendatarios en pequeños propietarios, los grandes latifundios permanecieron —en general— en manos de sus propietarios originales. Esto implicó dejar intacto el poder económico —y político— de la oligarquía. Gómez Morales admitiría: "Parecería que haber pretendido implantar en el país una justicia social, ejecutándola en forma incruenta y respetando hasta donde fue posible todos los derechos, significó dejar a nuestra retaguardia intacta la fuerza de la reacción para que cargara con más virulencia que nunca..."³⁷.

No obstante los esfuerzos del gobierno, y como lo demostrarían los hechos, era muy difícil lograr un acuerdo estable entre las distintas fuerzas sociales, y lo era más aún pretender que el régimen extendiera su representatividad hasta incluirlas a todas. La Revolución

Nacional no podría continuar sino al precio de lesionar ciertos intereses.

NOTAS DEL CAPITULO IV

¹ Ramos, Jorge A., "Revolución y Contrarrevolución en la Argentina: La Era del Bonapartismo", Plus Ultra, Bs. As. 1972, págs. 212-213.

² Galasso, Norberto, "La Izquierda Nacional y el FIP", Centro Editor de América Latina, Bs. As. 1983, pág. 79.

³ *Ibid.*, pág. 80.

⁴ Waldmann, Peter, "El Peronismo 1943-1955", Ed. Sudamericana, Bs. As. 1981, pág. 83.

⁵ *Ibid.*, pág. 82-83.

⁶ *Ibid.*, pág. 199.

⁷ Cafiero, Antonio, "Cinco Años Después", Bs. As. 1961, págs. 316-317.

⁸ Segundo Plan Quinquenal, Ediciones Hechos e Ideas, Bs. As. 1954, pág. 476.

⁹ *Ibid.*, págs. 557-558.

¹⁰ *Ibid.*, pág. 558.

¹¹ *Ibid.*, pág. 614.

¹² *Ibid.*, págs. 617-618.

¹³ El desarrollismo ha criticado este aspecto. Ver: Frigerio, Rogelio, "Síntesis de Historia Crítica de la Economía Argentina", Hachette, Bs. As. 1979, pág. 101.

¹⁴ Potash, Robert, "El Ejército y la Política en la Argentina 1945-1962", Ed. Sudamericana, Bs. As. 1982, pág. 203.

¹⁵ *Ibid.*, pág. 209.

¹⁶ *Ibid.*, pág. 208.

¹⁷ *Ibid.*, pág. 211.

¹⁸ *Ibid.*, pág. 211.

¹⁹ *Ibid.*, pág. 212.

²⁰ *Ibid.*, pág. 212.

²¹ *Ibid.*, pág. 213.

²² *Ibid.*, pág. 216.

²³ Waldmann, Peter, op. cit., pág. 59.

²⁴ Scenna, Miguel Angel, "Los Militares", Ed. De Belgrano, Bs. As. 1980, pág. 227.

²⁵ Perón, Juan Domingo, "Latinoamérica: Ahora o Nunca", Editorial Diálogo, Montevideo 1967, págs. 100-101.

²⁶ Sobre este tema, ver pormenores en Perón, op. cit., págs. 106-107.

²⁷ Remorino, Jerónimo, "Política Internacional Argentina 1951-1955", Bs. As. 1968, Tomo I, pág. 13.

²⁸ Sobre el tema y sus implicancias para América Latina, puede consultarse: Haas, Ernst, "Partidos Políticos y Grupos de Presión en la Integración Europea", BID-INTAL, Bs. As. 1966. En especial, el prólogo para la edición latinoamericana.

²⁹ Remorino, Jerónimo, op. cit., pág. 12.

³⁰ Potash, Robert, op. cit., pág. 223.

³¹ *Ibíd.*, pág. 229.

³² Waldmann, Peter, op. cit., pág. 203.

³³ Para la actitud de las entidades empresarias ante el gobierno, ver Waldmann, Peter, op. cit., págs. 200 a 202.

³⁴ Potash, Robert, op. cit., pág. 230.

³⁵ Senén González, Santiago, "Breve Historia del Sindicalismo Argentino", Alzamora Editores, Bs. As. 1974, pág. 78.

³⁶ Manifestaciones de Alfredo Gómez Morales, citadas por Caffero, Antonio en op. cit., pág. 436.

³⁷ *Ibíd.*, pág. 442. Las tardías reflexiones de Gómez Morales tuvieron lugar en la cárcel de Caseros, donde fueron alojados numerosos funcionarios del gobierno peronista; una vez que la revolución "Libertadora" le pusiera punto final al mismo...

V

1954

Los intentos de "ampliación" del régimen

El año 1953 había transcurrido entre los esfuerzos de Perón por ampliar las bases políticas sobre las que su gobierno se apoyaba. El intento de distensión con los partidos opositores —aún cuando la iniciativa no partió del oficialismo— y los lazos tendidos a las entidades empresarias, parecían seguir ese rumbo.

La apertura hacia Estados Unidos y la necesidad de promover inversiones externas, requerían sin duda un frente interno más cohesivo y un marco de estabilidad política que, desde 1951, las constantes conspiraciones no habían permitido. Por otra parte, la disminución del énfasis redistributivo que había caracterizado los primeros años de gobierno, podía hacer presumir un apoyo menos irrestricto por parte de la clase obrera, así como una mejor predisposición del empresariado.

Sin embargo, esos intentos no se verían coronados por el éxito: ni la CGE representaba realmente a todas las fuerzas empresarias, ni la CGP encarnaba las posiciones de los profesionales cuyas entidades pretendía nuclear. La mayoría seguirían tan antiperonistas como siempre, del mismo modo que la conciliación con los partidos políticos opositores no sería duradera.

La aspiración del peronismo de ampliarse y abarcar todo el cuerpo social —y todos los órdenes institucionales— se manifestaría en la constante ofensiva propagandística destinada a difundir las ideas y las realizaciones del gobierno. Esa propaganda —en exceso reiterativa— no había sido necesaria en los primeros años, cuando la obra de gobierno se difundía por su

propia fuerza. Cumpliría, además, una función muy relativa desde el punto de vista de la eficacia, al igual que los planes de adoctrinamiento de los cuadros militares o las tentativas de "peronizar" la universidad.

Es que esa concepción contenía un equívoco: el peronismo no podía —ni debía— encarnar intereses difusos, globales o abstractos, a riesgo de diluir su identidad política. La sociedad argentina albergaba sectores antinómicos, y desconocerlo era —por lo menos— una transgresión al realismo político.

El adoctrinamiento en las Fuerzas Armadas

En cuanto a las fuerzas armadas, Perón creía contar allí con bases firmes, después de la "limpieza" realizada tras el golpe de setiembre de 1951. El gobierno no había detectado nuevas conspiraciones, ni participación militar en los hechos del 15 de abril de 1953. No obstante, en 1954 se intensificarían los esfuerzos por someterlas a un mayor control, y lograr una identificación institucional cada vez más amplia con la doctrina y la acción del gobierno.

Ya en 1953 se había impuesto el Reglamento para Adoctrinamiento, Educación e Instrucción del personal del Ejército, y el Manual de Doctrina y Organización Nacional, destinados a difundir los principios del justicialismo entre el personal de la institución. "En 1954 se implantaron cursos de orientación política en el Colegio Militar y en la Escuela Superior de Guerra. Sugestivamente, no se intentó ningún adoctrinamiento en la Marina"¹. También en 1954, tras el nombramiento de un oficial peronista como director de la Escuela Superior de Guerra, la revista interna de la institución comenzó a incluir en sus páginas citas de pensamientos de Perón.

En enero de 1954, al reunirse con los generales de brigada recién promovidos, Perón pronunció un discurso que ilustra con amplitud su concepción acerca del papel que cabía a las fuerzas armadas en relación con el gobierno justicialista: "Hemos visto como, paulatinamente, el adoctrinamiento nacional dentro de las instituciones armadas progresa a pasos rápidos y seguros. El adoctrinamiento nacional representa para nosotros el punto de partida de una Nueva Argentina, que piensa de una misma manera, siente de un mismo modo y obrará únicamente de una misma forma. Por eso, damos a este adoctrinamiento una importancia extraordinaria. Yo observo, especialmente en el ejército, que ese adoctrinamiento progresa y progresa constructiva-

mente. Ese mérito es mérito que debo asignar personalmente al señor ministro y en forma general a los señores generales que están realizando una verdadera construcción en el ejército, dentro de esa doctrina nacional. Me satisface, como ciudadano y como soldado, que este adoctrinamiento progrese y que se vaya haciendo carne efectiva en la sinceridad y en la lealtad de los que mandan"².

Tales intentos de difusión doctrinaria fueron creando un clima adverso, especialmente en algunos grupos profesionalistas y sin identificación política definida, que probablemente constituían al grueso de la oficialidad joven. Esos sectores experimentaban rechazo ante las exigencias de conformismo y adhesión política.

La disconformidad existía también por otros motivos, no siendo el menor de ellos la llamada Ley de Autoabastecimiento, que tendía a reducir la incidencia de los gastos militares en el presupuesto, mediante el establecimiento de granjas en algunas unidades a fin de satisfacer las propias necesidades de alimentación y forrajes. Esto fue tomado por muchos oficiales como una imposición de tareas ajenas a su profesión en detrimento de las que le eran específicas; aún cuando el personal militar empleado en tales tareas no era excesivo: según lo manifestaba el Ministro de Ejército. "Se llamaron aproximadamente a 75.000 soldados para integrar las unidades de ejército y 5.000 más o menos, para las actividades productivas"³.

También había que contar con la mayoritaria extracción social de la oficialidad, prevalentemente de clase media, lo que determinaba solidaridades endogrupales y pautas culturales propias de ese sector social, que lo hacían poco proclive al peronismo. En los círculos castrenses, por lo demás, tenían amplia penetración elementos ideológicos definitivamente adversos al peronismo: en ello coincidían tanto liberales de origen masónico —abundantes entre la oficialidad naval— como cerriles nacionalistas católicos —discípulos del Padre Julio Menvielle, golpista de setiembre de 1951— que prevalectían en el Ejército.

Sin embargo, a lo largo de 1954, la inquietud en los cuarteles nunca fue tanta, ni tan generalizada, como para comprometer la situación del gobierno. Buena parte de los cuadros se mantenían adictos o al menos, disciplinados. Recién a fines de ese año y durante el siguiente, la crisis política produciría rápidas tomas de posición en contra del gobierno, aun cuando en el Ejército el peronismo contaría hasta el final con hombres leales.

El apoyo de la CGT al gobierno

En enero de 1954 tuvo lugar el Congreso Ordinario y Extraordinario de la CGT. En dicho Congreso, la central obrera emitió un nuevo pronunciamiento con la finalidad de "...expresar al general Perón, líder conductor de la Nueva Argentina, el apoyo incondicional y total de los trabajadores de la Patria"⁴. También se calificaba al Segundo Plan Quinquenal como de "beneficio exclusivo del pueblo...", ofreciendo la clase trabajadora "...la totalidad de las energías para el mejor éxito del mismo"⁵.

Evidentemente, el apoyo cegetista a Perón era total, al igual que la aceptación de la política económica, aun cuando ésta ya no beneficiara en forma tan ostensible al sector asalariado. Ese grado de conformismo por parte de la central obrera, generaría a veces dificultades, pues se vería precisada a actuar de una manera "frenadora" frente a las demandas de dirigentes intermedios o de bases.

Así, en mayo de 1954, al firmarse un convenio colectivo de obreros metalúrgicos, una delegación de trabajadores del gremio solicitó la convocatoria de una asamblea general, y se lanzó a la huelga. Se produjeron enfrentamientos con las autoridades gremiales —que no apoyaban la medida—, asambleas espontáneas y luchas internas. Medió en el conflicto el ex secretario general de la U.O.M. y diputado peronista Hilario Salvo, y finalmente se llegó a un arreglo que significó una mejora en el convenio inicialmente suscripto. Sin embargo, como saldo de la huelga hubo algunos cesantes y detenidos.

El énfasis puesto en mantener la disciplina laboral, evitando reclamos salariales excesivos —capaces de comprometer la estabilidad económica que el gobierno procuraba asegurar—, sometía a los dirigentes al riesgo de ser desbordados. En las bases, los compromisos políticos eran menores que en las cúpulas.

Sin embargo, y aunque la clase obrera no siempre compartiera el entusiasmo de sus dirigentes por la política económica del gobierno, sería un error suponer que su adhesión a Perón se había debilitado. Como lo demostrarían las elecciones, las dificultades económicas no habían erosionado el consenso con que el peronismo contaba, particularmente en la clase obrera. "La convicción de que Perón era irremplazable, de que no existía más alternativa que su gobierno, se tiende como un hilo conductor a través de todas las manifestaciones de los sindicatos y de los obreros, desde 1944 hasta 1955. Esta convicción... explica porqué la oposición al régimen dentro de la clase trabajadora nunca pudo afir-

marse... A pesar de sus visibles debilidades, el régimen seguía siendo para los obreros el primero que había encarado con seriedad el problema social. Sólo su continuidad podía evitar una revisión de la obra reformatoria, podía impedir que las clases media y alta volvieran a marginar a los estratos más bajos de la sociedad"⁶.

Esa permanente adhesión, que mucha sociología "científica" pretenderá explicar por los engaños del "dema-gogo" o por el magnetismo del carisma, era ante todo la expresión de un descarnado y objetivo realismo político: muchos harían causa común con la oligarquía, pretendiendo el reemplazo de Perón por una democracia social sin autoritarios ni corruptos, o por un nacionalismo expurgado de contenidos plebeyos. En ambos casos, se trataba de una vana ilusión. A Perón le sucedería la oligarquía.

Las elecciones de abril del 54

A poco de iniciado 1954, el gobierno anunció para el 25 de abril, la convocatoria a elecciones destinadas a renovar la Legislatura y designar Vicepresidente de la Nación. Este último cargo, permanecía vacante desde dos años atrás, al fallecer el doctor Hortensio Quijano. En cuanto a la renovación de ambas Cámaras parlamentarias, los legisladores tardarían aún un año en concluir sus mandatos; sin embargo, el gobierno decidió adelantar el comicio con el fin de reducir los gastos y complicaciones implicados en las elecciones.

La convocatoria sirvió para generar divergencias de opiniones en el seno de los partidos opositores. Dentro del radicalismo, el sector intransigente —que lideraba Arturo Frondizi— se pronunciaba por la participación en el comicio. En cambio, los denominados "unionistas", así como el sabattinismo cordobés, pretendían que el partido se abstuviera. La misma polémica se produjo en el partido demócrata, así como en el socialismo.

Al llevarse a cabo la convención nacional de la U.C.R. —en marzo de 1954— se impuso el sector intransigente —que propugnaba la concurrencia a elecciones— y resultó designado presidente del Comité Nacional el doctor Arturo Frondizi. Como resultado de la elección, se produciría la escisión del sector "unionista", que se negó a aceptar las resoluciones de la convención, formando su propio bloque de diputados y obteniendo el control de las Convenciones de la Capital Federal y Santa Fe.

La Asamblea del Partido Demócrata —si bien fue

convocada— no arribó a decisión alguna, aunque la agrupación también participó finalmente del comicio. Por su parte, el Partido Socialista condicionó su intervención al levantamiento del estado de guerra interno, y retiró sus candidatos al no cumplimentarse su exigencia. Tomaría parte en las elecciones, en cambio, el sector disidente —Partido Socialista de la Revolución Nacional— que alcanzó cerca de 100.000 votos en el orden nacional.

La campaña electoral —como en 1951— privó a la oposición del uso de las radios, aunque se desarrolló sin violencias. Una nota desusada fue la ostensible muestra de parcialidad evidenciada por el ministro de Ejército, general Franklin Lucero, quien ofreció un almuerzo en su residencia de Campo de Mayo al candidato oficialista —y senador justicialista— Alberto Tesaire, y a otras autoridades partidarias. Aunque al agasajo concurren numerosos jefes y oficiales, esa manifestación de adhesión no reflejaba la opinión generalizada de la Fuerza.

El resultado de las elecciones puso una vez más de manifiesto que el peronismo constituía una mayoría indiscutible. Tesaire fue consagrado con 4.994.106 votos, contra 2.493.422 del candidato radical Crisólogo Larralde. Proporciones similares alcanzó el triunfo en la elección legislativa. Teniendo en cuenta que no se trataba de elecciones presidenciales, con Perón como candidato, ni siquiera quedaba enteramente en pie el argumento del carisma. El porcentaje alcanzado era prácticamente igual al obtenido en las elecciones de 1951. Había que convenir que el gobierno seguía contando con sólida apoyatura popular.

El fin de la "tregua"

El acercamiento que la oposición y el gobierno habían ensayado hacia fines del año anterior, tuvo escasas posibilidades de prosperar. No había pasado de mutuos gestos de buena voluntad, en un momento en que las relaciones habían desmejorado en exceso. Por lo demás, el radicalismo —que era el eje de la oposición política— había rechazado por considerarla humillante la tregua propuesta.

En realidad, las relaciones no podían ser armoniosas. Era lógico que así ocurriera, en tanto el peronismo encarnaba sectores contestatarios, que venían a cuestionar la legitimidad de un esquema de participación en el poder, caracterizado por una cierta estabilidad hasta su irrupción. Por lo demás, un movimiento sur-

gido desde la entraña de un pronunciamiento militar —aunque luego rompiera ese molde— no podía sino conservar algunos de sus rasgos originales: una consideración poco favorable hacia los políticos y los partidos tradicionales, y un modelo organizativo cohesivo y verticalista que procuraría proyectar sobre todo el cuerpo social.

Así, la oposición y los partidos fueron vistos desde el poder como "facciones" representantes de intereses sectoriales y mezquinos, en tanto el peronismo se arrogaba la representación del interés nacional.

El 19 de abril, poco antes de las elecciones, Perón habló en el Luna Park ante 30.000 gremialistas y miembros del partido. En un discurso —especialmente destinado a atacar al radicalismo y rebatir sus críticas— afirmó: "Nosotros no representamos un partido político; ésta ha sido nuestra permanente afirmación. Nosotros representamos un verdadero Movimiento Nacional... nuestro Movimiento está representado por el pueblo mismo. Nuestros adversarios, en cambio, están representados en la actualidad por algunos dirigentes ya casi octogenarios. Los demás son sólo los antiguos vividores de los comités..."

Acto seguido, Perón pasó revista a las realizaciones de su gobierno, y enfatizó el silencio cómplice del radicalismo en los negociados de la "década infame", así como sus compromisos con la vieja estructura económica heredada.

Esos ataques procuraban responder a las críticas cada vez más agudas, referidas a la "venalidad" oficial y a los problemas económicos más acuciantes, que eran los flancos débiles del régimen.

La evidencia de sus realizaciones proveía al gobierno argumentos sólidos, pero la oposición aprovecharía cada resquicio en sus embates críticos.

La política petrolera y el desplazamiento a la izquierda de la oposición

Con el triunfo de los intransigentes, el radicalismo pasaría a encabezar —junto con el partido Comunista— la oposición al peronismo desde la "izquierda".

El tema álgido que encendería la ofensiva radical y liquidaría la breve tregua política, sería el giro que el peronismo imprimía a su política sobre inversiones externas, y particularmente referido al petróleo.

Perón sabía, sin duda, que el punto era en extremo delicado: ofrecería un flanco para la crítica externa, y despertaría comprensibles reservas dentro de su propio

partido. En primer lugar, el monopolio estatal en materia petrolera había sido sostenido históricamente por los radicales, que reivindicaban la figura precursora de Mosconi. Por lo demás, si antes habían sido estigmatizados por Perón, cuando éste denunciaba la complicidad de quienes se aliaban con Braden en la Unión Democrática, ¿cómo no aprovechar la oportunidad que se les brindaba cuando el peronismo parecía dispuesto a claudicar de su nacionalismo económico?

La cuestión se había planteado ya el año anterior, con motivo de la aprobación de la Ley de Inversiones Extranjeras, y estaba destinada a levantar polvareda...

Hacia fines de 1953, Perón había comenzado a tratar el tema en sus discursos en procura de consenso: al hablar frente a un grupo de sindicalistas, en el mes de setiembre de ese año, se refirió a las ventajas mutuas que depararía la intervención de compañías extranjeras en la extracción de petróleo, trabajando para YPF: "Y bueno, si trabajan para YPF, no perdemos absolutamente nada, porque hasta les pagamos con el mismo petróleo que sacan. En buena hora, entonces, que vengan para que nos den todo el petróleo que necesitamos. Antes no venía ninguna compañía si no le entregaban el subsuelo y todo el petróleo que producía. Ahora, para que vengan a trabajar, ¿cómo no va a ser negocio, un gran negocio, si nosotros estamos gastando anualmente en el exterior arriba de 350 millones de dólares para comprar el petróleo que necesitamos, que lo tenemos bajo tierra y que no nos cuesta un centavo! ¿Cómo vamos a seguir pagando eso!... ¿Que ellos sacan beneficios? Por supuesto que no van a venir a trabajar por amor al arte. Ellos sacan su ganancia y nosotros la nuestra; es lo justo"⁸.

Y en abril de 1954, en la ya citada reunión con dirigentes partidarios, Perón volvió a referirse extensamente al tema: "¿Qué vamos a entregar las reservas petrolíferas si lo que nosotros hacemos, en realidad, es contratar empresas que vengan a sacar el petróleo y, que una vez que lo saquen nos lo entreguen! Nosotros les pagamos lo que han gastado más un porcentaje que ellos tienen derecho a percibir. Pero nosotros tenemos el petróleo, que es lo que necesitamos para un caso de guerra, a fin de no quedarnos con la mitad del país paralizado. Fíjense ustedes: no es un problema de dinero; es un problema de petróleo, porque después, aun con dinero, no vamos a conseguir el petróleo si se produce la guerra. ¿Qué vamos a entregar el petróleo! Es como cuando uno manda a construir una casa, lo trae el constructor y le dice: constrúyame la casa. Con el criterio de ellos, estaríamos entregando la casa al cons-

structor. No señor; es uno que viene a trabajar, se le paga, pero después uno habita la casa"⁹. Asimismo, culpó a la imprevisión de los radicales —por haber mantenido inexploradas las reservas petroleras— de la crisis de escasez que el país afrontaba.

Sin embargo, las explicaciones de Perón no alcanzaban para acallar las polémicas. El tema admitía diversas consideraciones, y realmente era conflictivo. ¿Podía un gobierno popular y declaradamente nacionalista en lo económico, negociar con el imperialismo sin arriar sus banderas? Perón apelaba a criterios estrictamente pragmáticos, y bajo ciertas circunstancias podía admitirse un retroceso táctico, si contribuía a consolidar —a más largo plazo— la independencia económica.

Sobre un tema tan "caldeado", el gobierno se vio precisado a actuar con extrema prudencia. En principio, se procuraron establecer acuerdos con compañías independientes, en la presunción de que —a diferencia de las grandes petroleras— no exigirían concesiones y aceptarían trabajar para YPF bajo el sistema de contratos de locación de servicios, que dejarían a salvo el interés nacional y las reservas incluidas en el artículo 40 de la Constitución.

Hacia el mes de junio, la compañía Floyd Oilium convocó a una conferencia de prensa para anunciar que había llegado a un acuerdo con el gobierno, con el fin de perforar pozos petroleros y construir un gasoducto hasta Bahía Blanca. Sin embargo, posteriormente se supo que el convenio no llegó a firmarse.

Tiempo después, Alfredo Gómez Morales —a la sazón ministro de Finanzas— explicaría los motivos de la apertura del gobierno hacia las compañías privadas extranjeras en materia petrolera. Destacaría en primer lugar la creciente asimetría entre la producción nacional y el consumo, que obligaba a importar un 60 % con la consiguiente erogación de divisas. El peligro de una tercera guerra —que podría privar al país de ese insumo esencial— era otro motivo para acelerar la marcha hacia el autoabastecimiento. "¿Qué hacía falta, pues, para llevar a cabo esta obra patriótica con la decisión y rapidez que las circunstancias exigían? Eran necesarios ingentes capitales y considerable aumento del personal técnico dedicado a esa actividad. ¿Podía el país por sí mismo, sin la colaboración extranjera, llevarla a cabo? Quizá sí, pues YPF había demostrado su eficiencia a través de la localización de la inmensa mayoría de las reservas conocidas y extraía el 85 % de la producción nacional. Pero cabe destacar que el esfuerzo sería enorme y que el autoabastecimiento nunca podría lograrse sin medidas económico-financieras que signifi-

caran serios sacrificios para el país. En efecto, no resultaría fácil cargar a nuestro balance de pagos con los centenares de millones de dólares necesarios para la adquisición de material de perforación, almacenamiento, transportes, para la construcción de gasoductos, oleoductos, etc., sin afectar nuestras reservas monetarias y sin implantar un rígido sistema de prioridades en la aplicación de las divisas, propio de una economía de guerra que obligaría a postergar la atención de otras necesidades también básicas para la vida del país. No podía recurrirse al crédito internacional, porque tanto los organismos internacionales de crédito como las agencias estatales o para-estatales de los países productores de material petrolífero no se manifiestan, en general, dispuestos a financiar este tipo de inversión. El Exim-Bank y otros bancos norteamericanos, por ejemplo, contestaban que no facilitarían créditos mientras hubiera disponibles capitales privados que pudieran suplirlos. Constituye esta actitud una forma indirecta de remitir a los peticionantes a la esfera de los grandes monopolios internacionales, que dominan esta industria. Es cierto que una vez firmado el contrato con la California Argentina, la Unión Soviética nos ofreció un crédito de 150.000.000 de dólares a pagar en un plazo de 15 años con productos argentinos. Pero aún superando la evidente intención política de este ofrecimiento —que no rehusamos— es obvio que sólo ciertos materiales producidos por ese país son adecuados para nuestras necesidades, tal como dictaminó el Cuerpo Técnico de YPF. Había otra solución y ésta residía en la colaboración de ciertas empresas extranjeras dispuestas a sumar su esfuerzo a la acción de YPF en condiciones aceptables para el país”¹⁰.

Pero la presunción de que el gobierno “pactaba” con el extranjero movilizaría especialmente a la clase media universitaria, y a toda la izquierda de la semicolonía. Los mismos que durante la guerra se inflamaban de fervor aliadófilo y acusaban a Perón de nazi, ahora lo suponían un agente yanqui.

El peronismo y la Universidad

Todo este problema del petróleo movilizaría fuertemente a la juventud universitaria, tradicional clientela de las izquierdas liberales. La fervorosa aliadofilia de los tiempos de la guerra, había sido sustituida por un no menos fervoroso antiimperialismo. Si antes se habían opuesto a un Perón nazi, ahora enfrentaban a un Perón pro-yanqui.

El claustro universitario, reducto de prestigiosos académicos liberales, no había permitido hacer pie al peronismo. El viento reformista que en los primeros años del siglo quitó las telarañas a la vieja universidad conservadora, se había limitado luego a la autonomía y la libertad de cátedra —raramente practicada—. La Universidad liberal sería, pues, una “isla científica” en la semicolonía.

El peronismo —poco respetuoso de esos principios de libertad formal— quiso “peronizar” la Universidad, en lugar de nacionalizarla. Con poco tino y peor fortuna, tendió a dejarla —con pocas excepciones— en manos de elementos clericales y ultramontanos, o de mediocres que hacían de la profesión de fe partidaria su principal mérito académico. El resultado fue el alejamiento de muchos profesores liberales de probada capacidad, en tanto que permanecerían los menos brillantes, súbitamente “peronizados” para mantener sus cátedras¹¹. La otra consecuencia sería la necesaria reacción adversa de gran parte del estudiantado, que se volvería más antiperonista.

La comunidad universitaria —que se llevaba mejor con el antiimperialismo y las causas nacionales de países distantes que con la realidad próxima— rechazaría a los profesores peronistas, a los que apodararía “flor de ceibo”, al igual que los despreciados productos de la industria nacional... Militaría orgullosa en la oposición, sintiéndose libertadora y justiciera en el combate contra el “tirano” que quitaba las libertades, oprimía al pueblo y engañaba a la clase obrera...

Pero si el peronismo desacertaba en su política universitaria, contribuiría sin embargo a democratizar la Universidad en un sentido esencial: al posibilitar una mayor capilaridad social, tendía a ampliar la base de reclutamiento de la educación superior. Es que —según lo expresara un pensador insospechable de “populismo”—, “...la tarea de hacer porosa la Universidad al obrero es en mínima parte cuestión de la Universidad y es casi totalmente cuestión del Estado. Sólo una gran reforma de éste hará efectiva aquélla”¹².

La “inmoralidad” del gobierno y la UES

En los sectores menos politizados de la clase media, prendería con más facilidad otro tipo de crítica: aquella que apelaba a la “amoralidad” implícita en las actitudes oficiales.

Ya nos hemos referido a la agitación en torno a los negociados y las corruptelas administrativas, que mu-

chas veces hallaban justificación en el comportamiento de ciertos funcionarios. Pero hacia 1954, un tema nuevo inquietaba la moral pequeño-burguesa y concitaba severas críticas opositoras. El ministro de Educación, Armando Méndez San Martín, había impulsado la creación de una organización denominada UES (Unión de Estudiantes Secundarios), destinada a nuclear a los estudiantes de ambos sexos, a nivel nacional. La organización contaba con dos ramas —masculina y femenina— y debía cumplir funciones recreativas y deportivas. La afiliación —que no era obligatoria— ponía al alcance de los adolescentes diversas instalaciones deportivas cedidas por el gobierno. Perón destinó para la rama femenina de la UES, parte de la residencia presidencial de Olivos. Las instalaciones se inauguraron en enero de 1954.

La organización de la UES no tardó en despertar reservas: se le adjudicaban fines de captación ideológica —lo que en parte era verdad— y se decía que el gobierno pretendía intervenir en la educación de los adolescentes, apartándolos de la tutela de sus padres y provocando la disolución familiar.

Cuando se inauguraron las instalaciones de Olivos, cundió la presunción de que la UES se había organizado para solaz del Presidente y los funcionarios del gobierno, y de que allí se realizaban bacanales y se corrompía a las estudiantes. La frecuente presencia de Perón en el lugar, servía para dar pábulo a tales imputaciones.

Al caer el peronismo, se difundirían extensamente detalladas crónicas de las supuestas inmoralidades cometidas por Perón y sus colaboradores, así como acerca de las relaciones íntimas que el Presidente habría mantenido con una joven estudiante, con la que se lo acusaría de convivir.

Las actividades de la UES no tardaron en despertar también la preocupación de algunos sectores de la Iglesia, que a más de hacerse eco de los rumores y comentarios circulantes, creían advertir un intento del gobierno peronista de desplazar la influencia de esa institución sobre la formación de la juventud.

La cuestión fue, sin duda, exagerada y agrandada, y tuvo que ver con el enfrentamiento que meses más tarde se produciría entre el gobierno y la Iglesia. Estimuló el vuelco de muchos sacerdotes y católicos militantes, que comenzaron a oponerse abiertamente al régimen. No fue, indudablemente, la causa principal, pero contribuyó a enrarecer el clima que desembocaría en un conflicto alimentado por mutuas provocaciones.

La devolución de los trofeos de guerra

En agosto de 1954, Perón viaja a Asunción del Paraguay, para entrevistarse con el presidente Alfredo Stroessner. El motivo principal del viaje fue la devolución de los trofeos obtenidos por la Argentina en la Guerra de la Triple Alianza, lo que se lleva a cabo el 15 de agosto de 1954.

Más allá del acercamiento entre ambos países —se había firmado un convenio económico en 1953— y de la amistad personal que uniría a Perón y Stroessner, se trataba de un acto de reparación histórica. Aquel triste y sangriento triunfo, donde la Argentina sacrificó tantas vidas para contribuir al genocidio del pueblo hermano, pesaba dolorosamente sobre el país.

La "gesta" mitrista rememoraba la oprobiosa condición de una Argentina atada a las intrigas de la Cancillería británica, e instrumento de las ambiciones subimperialistas del Brasil de entonces. Representaba un jalón decisivo en la política balcanizadora que desarrolló el Imperio en el siglo XIX con la vieja Nación Hispanoamericana. Esa misma balcanización que el peronismo, a los tropezones, procuraba revertir.

La muerte de Getulio Vargas

El 24 de agosto de 1954 se suicidaba en el Palacio Catete el presidente del Brasil, Getulio Vargas.

Sustentado por amplios sectores de la clase obrera, el gobierno popular de Vargas fue acorralado tenazmente por la ofensiva combinada de las derechas conservatistas y las izquierdas incomprensivas, hábilmente manejadas por el imperialismo. Acusado de dictador y corrupto, Vargas se quita la vida al pronunciarse las fuerzas armadas en su contra.

De algún modo, lo ocurrido en el Brasil preanunciaba los hechos que poco después ocurrirían en la Argentina.

Aunque su trabada gestión había impedido al presidente brasileño plegarse a la política latinoamericana que Perón procuraba impulsar, su muerte quitaría del tablero una pieza importante.

El conflicto con la Iglesia

La segunda mitad del año 1954, y especialmente sus postrimerías, estuvieron dominadas por el paulatino desmejoramiento de las relaciones entre el régimen peronista y la Iglesia. Consecuencia de un proceso gra-

dual pero creciente, resulta particularmente difícil establecer sus orígenes precisos. Parece atinado pensar que no existió una causa única. Varias circunstancias produjeron roces, que desarticularon lo que había sido una convivencia armónica en los primeros años del régimen. Las posiciones se fueron tensando —principalmente por la miopía del gobierno— hasta que la situación devino abiertamente conflictiva, y fue usada —y sin duda realimentada— por fuerzas a las que les sobraban razones —y sólo necesitaban excusas— para atacar al peronismo.

“La cuestión religiosa, como el tema del petróleo —la Fe y la Soberanía, según sus exaltados apóstoles— no sirvieron en realidad sino para justificar decorativamente la ofensiva oligárquica... El objetivo central de la campaña consistía en convulsionar el espíritu de la pequeña burguesía: de los estudiantes que polarizan de inmediato su energía, de los pequeños rentistas con alquileres congelados, de las madres de familia con hijas jóvenes, de los empleados públicos con sueldos fijos, de los comerciantes minoristas amenazados con las listas de precios máximos, de los importadores sin permisos de cambio, de los intelectuales de nervios débiles, en fin, de esa inmensa clase media que servía en Buenos Aires de masa de maniobra para la estrategia imperialista y a la que el proceso inflacionista había deteriorado sus condiciones de vida” 13.

A. Ramos

Los orígenes

Las relaciones entre el peronismo y la Iglesia se habían desarrollado, en un primer momento, en un marco de cordialidad. En 1945, antes de las elecciones, una carta pastoral había recomendado a los católicos votar en contra de los partidos que auspiciaran la separación de la Iglesia y el Estado, la enseñanza laica y el divorcio, con lo que se manifestaba a favor de Perón y en contra de la Unión Democrática, que exhibía un programa de reformas en tales aspectos. “En correspondencia, un año y medio después —el 14 de marzo de 1947— la Cámara de Diputados votaba la ratificación del decreto-ley del 31 de diciembre de 1945 por el cual se implantaba la enseñanza religiosa” 14. En el mismo año de 1947, el padre Hernán Benítez —asesor espiritual de Eva Perón y muy ligado al régimen— viajó al Vaticano a entrevistarse con el Papa Pío XII. El Pontífice habría manifestado en esa oportunidad una posición favorable al gobierno argentino.

Sin embargo, esta posición de la Iglesia variará en razón de circunstancias ajenas al gobierno peronista. Transcurridos los primeros tiempos de la posguerra, y con el inicio de la “Guerra Fría”, la estrategia general diseñada para Europa, con la finalidad de frenar el avance comunista, consistirá en impulsar la creación de los partidos Demócrata Cristianos. La experiencia —exitosa en Europa— se procurará trasladar a Suramérica. Aparentemente, tendrá decisivo peso en esa iniciativa la influencia en las esferas vaticanas del Arzobispo de Nueva York, Joseph Spellmann, enrolado en el sector liberal de la Iglesia y manifiestamente opuesto a los procesos de revoluciones nacionales en marcha en esta parte del mundo, tales como el peronismo y el M.N.R. boliviano 15.

Hacia 1949, esa estrategia comenzará a ponerse en marcha con una reunión convocada en Montevideo, a efectos de preparar el lanzamiento de las democracias cristianas. En ese mismo año, habríase producido una reunión entre Perón y los obispos argentinos, donde estos realizaron algunos planteos críticos 16. Tales serían los más incipientes signos de tirantez. Sin embargo, la situación tardaría aún en desmejorar.

Hacia 1952, esta política trazada por el Vaticano será impulsada con más fuerza. Esto produce que “...sectores importantes de la alta jerarquía eclesiástica, y militantes del nacionalismo católico (estos últimos, tempranamente apartados del peronismo), comiencen a organizar un partido político democristiano. Con el objetivo de ganar fuerzas para esta alternativa, la Iglesia comenzó a dar impulso a diversas organizaciones de tipo gremial, como asociaciones de médicos, maestros, abogados, industriales, ganaderos y obreros católicos. Tomó fuerza la actividad de la Acción Católica” 17. Esto provocaría preocupación y disgusto en Perón, que veía tras la creación de esas instituciones, el propósito más o menos velado de contrarrestar la expansión de las organizaciones similares impulsadas por su partido. Simétricamente —como hemos dicho— en la Iglesia existía malestar por las actividades de la UES y la influencia del peronismo sobre los sectores juveniles allí nucleados.

El Partido Demócrata Cristiano se funda oficialmente en julio de 1954. Hasta ese momento, sus dirigentes habían actuado con ciertas reservas, temiendo algún tipo de persecución por parte del gobierno, en momentos en que ya se advertían signos evidentes de disgusto oficial. Uno de los principales de esos dirigentes, será el doctor Manuel Ordóñez.

La evolución

Ya en el mes de junio, se produciría un hecho de importancia menor, que sin embargo preanunciaba el conflicto. Un predicador que pretendía realizar curas milagrosas —el reverendo Thomas Hicks— llega a Buenos Aires, y recibe las pertinentes autorizaciones municipales y policiales para realizar concentraciones en el estadio del club Atlanta. La permisividad del gobierno frente a la actuación del “manosanta” es considerada por algunos como un deliberado intento de irritar a las autoridades eclesiásticas.

En el mes de setiembre, un grupo de diputados peronistas introduce en Cámara un proyecto de ley destinado a eliminar las discriminaciones públicas y legales existentes entre los llamados hijos legítimos e ilegítimos. Se determina en dicha norma que los hijos tendrán los mismos derechos y obligaciones, y serán calificados de legítimos, cualquiera sea el estado civil o relación de parentesco de los padres. Inmediatamente se produce la reacción adversa de parte de diversas entidades —Corporación de Abogados Católicos, Liga de Padres de Familia— y publicaciones católicas, que consideran que el proyecto atenta contra la familia. En realidad, no se trataba sino de suprimir una situación legal discriminatoria y regresiva, propósito inobjetable por cierto. Sin embargo, el clima y las prevenciones ya existentes, le adjudicaron otro sentido.

El 29 del mismo mes de setiembre, en un discurso pronunciado en la CGT por Perón, ya habría signos más claros: “La religión debe practicarse fuera de las organizaciones sindicales. Yo recuerdo, cuando vine aquí, que había sindicatos de oficios varios. Había también otros sindicatos religiosos. ¿Qué tiene que ver la religión con esto? Así como los trabajadores no se meten con la religión, ésta no debe meterse con la organización sindical... Que hagan política o religión en su casa, pero no en la organización donde somos todos iguales”¹⁸. Poco más tarde, el secretario adjunto de la CGT, Hugo di Pietro, aludiría a la “infiltración clerical” en las organizaciones del pueblo.

Pero la explosión se produciría en noviembre. En la quinta presidencial de Olivos tiene lugar una reunión de gobernadores provinciales, con asistencia de Perón, Tesaire y los integrantes del gabinete nacional. También están presentes legisladores, representantes de la CGT y del partido. Perón pronuncia allí un extenso discurso —transmitido por radio—, en el que critica en forma abierta las actitudes de los miembros de la Acción Católica, a la que califica de asociación de orden interna-

cional, que debe ser vigilada. Luego se refirió al clero: “¿Qué es el clero? Es una organización como cualquier otra, donde hay hombres buenos, malos y malísimos...”¹⁹. Y enseguida, denuncia la actitud de algunos “malos prelados” que actúan en contra del gobierno y de la Nación: “¿Dónde se producen con mayor virulencia estas cosas? En tres partes, hasta ahora: Córdoba, La Rioja y Santa Fe. Es curioso: los tres obispos sindicados como abiertos enemigos del gobierno son precisamente los tres obispos de esas provincias... Nosotros no necesitamos averiguar mucho; nos basta solamente con lo que se ha expuesto aquí y los nombres que se han dado y que voy a repetir ahora para que los conozcan bien: el obispo de Santa Fe, Fasolino, y su secretario Legendecker; el obispo de Córdoba, Laffite... En Córdoba es donde, indudablemente, suceden las cosas más raras. Ese señor padre Bordagaray, asesor del Ateneo Universitario de Córdoba, que es quien dice que debe elegirse entre Cristo o Perón”²⁰. Y seguidamente, Perón continúa pasando revista a diversas situaciones provinciales en relación con las actitudes del clero, sin ahorrar acusaciones para los sacerdotes que desarrollan actividades opositoras desde su ministerio. Sobre el final, parece quitarle importancia al problema: “Para nosotros esto no pasa de estos individuos. Aquí hay como 16.000 integrantes del clero. ¿Cómo vamos a hacer una cuestión porque haya 20 ó 30 que sean opositores? Es lógico que entre tantos haya algunos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que tomar medidas con esa gente. Tiene razón la jerarquía eclesiástica cuando me dice que no es la Iglesia, sino algunos curas descarriados de la Iglesia. Nosotros vamos a ayudarlos para que los pongan en su lugar y trataremos de descarriarlos para otro lado que no sea el nuestro. Eso es todo”²¹.

Varias organizaciones gremiales y partidarias no tardan en hacerse eco de las palabras de Perón y se pronuncian también en tono duro: se hablará de la “oligarquía que se oculta tras las sotanas”. El Consejo Superior Peronista manifestará que “la infiltración clerical en las organizaciones del pueblo no es más que una de las tantas maniobras efectuadas durante estos últimos diez años para confundir a la opinión pública y alejar al pueblo de su verdadero destino”. Poco después, en Córdoba, son detenidos algunos sacerdotes.

La respuesta del Episcopado no se hace esperar, y aunque en un tono conciliador, manifiesta “estupor y asombro” y un “vivo dolor ante la sindicación hecha de tres beneméritos y dilectos hermanos nuestros en el Episcopado como abiertos enemigos del gobierno”.

Con ese discurso —el pronunciado en la quinta pre-

sidencial— Perón ha roto lanzas. Aunque procuró poner a salvo a la Iglesia como institución, para centrar el fuego en “algunos curas”, el tono y la forma de la imputación, así como el hecho de haber nombrado abiertamente a obispos y sacerdotes, causan disgusto evidente. ¿Qué lo ha movido a pronunciarlo? Por un lado, poco antes, al llevarse a cabo una celebración juvenil en Córdoba, organizada por la UES, la misma ha sido saboteada por la Acción Católica, poderosa en la provincia y en especial en el ámbito educativo. Al restar su concurrencia los colegios religiosos, el acto fracasó. Esto ha molestado a Perón, informado sobre el particular por Méndez San Martín, que ha sentido el “boicot” como una cuestión personal. Por otra parte —y según lo evidencia la referencia hecha en su discurso— Perón sabe que muchos sacerdotes usan el púlpito para predicar contra el gobierno, y plantean que debe elegirse entre la religión y el peronismo. Probablemente, no desconoce que esa prédica tiene destinatarios militares.

De allí en más, lejos de atemperar los ánimos, el gobierno impulsará un conjunto de medidas que terminarán de resquebrajar las relaciones con la Iglesia.

En el mes de diciembre, el Poder Ejecutivo envía al Congreso el proyecto de ley que instituye el Bien de Familia. El bloque peronista introduce una reforma, que incluye la disolución del vínculo matrimonial a pedido de los cónyuges, transcurrido un año de la sentencia que declaró el divorcio. Así se instituye el divorcio vincular, que no había sido propugnado por el peronismo hasta ese momento.

Por la misma época, un decreto del Poder Ejecutivo facultará a los gobiernos provinciales y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, para permitir la apertura de “los establecimientos a que se refiere la Ley de Profilaxis Social”. En otras palabras, se permitía la apertura y funcionamiento de prostíbulos.

Desde el Ministerio de Educación se propicia el decreto que elimina la educación religiosa en las escuelas estatales —que fuera ratificada en 1947—. También son eliminadas la Dirección General de Enseñanza Religiosa y la Inspección General de Enseñanza Religiosa, y se dejan sin efecto los aportes estatales a la enseñanza privada, tras denunciarse irregularidades en su utilización.

Este conjunto de medidas, de sentido muy diverso, preparaba el camino para la separación de la Iglesia y el Estado, que sería propuesta en 1955 por un proyecto de ley enviado a la Cámara por el bloque de diputados de origen sindical.

Algunas de las iniciativas adoptadas eran censura-

bles en sí mismas. Tal el caso de la legalización del funcionamiento de prostíbulos (que no llegaría a aplicarse). Esto era una aberración que el peronismo —habiendo asumido una postura precursora en la defensa y promoción de los derechos de la mujer— no podía propiciar. El argumento esgrimido desde esferas oficiales para justificar la medida —que algunos atribuyeron al ministro de Salud Pública E. Bevacqua— era insostenible: el incremento de la homosexualidad y la corrupción, hacía preferible una prostitución controlada. Un mal menor... Un gobierno de esencia progresista no podía convalidar ese absurdo, que sólo podía entenderse como una provocación burda...

No ocurría lo mismo, por cierto, con la supresión de la instrucción religiosa en las escuelas del Estado. Aunque pudiera irritar a muchos —peronistas incluidos— la misma Iglesia aceptaría, andando el tiempo, la inconveniencia de impartirla. La eliminación de los subsidios podía justificarse como una medida democratizadora, si se piensa que la enseñanza privada es necesariamente restrictiva. Y el divorcio vincular —que duraría poco en vigencia— permitiría regularizar un cierto número de uniones matrimoniales no legales; era —ya entonces— una necesidad pasible de ser contemplada.

Sin embargo, lo que podía ponerse en tela de juicio era la oportunidad, el contexto político en que esas medidas tenían lugar. La nula preparación de la opinión pública al respecto, la forma abrupta en que se decidieron, la falta de análisis previo; todo daría pábulo a la fundada impresión de que se trataba de atacar a la Iglesia.

Las motivaciones

Si se piensa que el peronismo se había impuesto con holgura en las últimas elecciones —lo que relativizaba la amenaza que en términos políticos habría de significar un nuevo partido, con escasas posibilidades de crecimiento— y un choque serio con la Iglesia podía en cambio, ser usado fácilmente con fines desestabilizadores, cuesta comprender cómo Perón pudo caer en la trampa y dejarse llevar a una actitud provocativa, sin duda desmesurada y de impredecibles consecuencias. Por más que creyera advertir en el crecimiento de las instituciones católicas un obstáculo para los intentos de una más amplia penetración del peronismo en las clases medias, y deseara poner coto a la prédica política de algunos sacerdotes, era evidente que esos propósitos se

favorecerían más atemperando el conflicto que alimentándolo. ¿No lo creyó así Perón? ¿Se trató de un error de cálculo o de una actitud incontrolada, más emocional que racional?

Para algunos autores, la explicación no sería exactamente esa: Perón habría inducido deliberadamente una campaña de provocaciones, para desatar el conflicto, desviando de ese modo la atención de la opinión pública del problema del petróleo. Tal la opinión de Miguel Scenna, para quien la misma convocatoria a la Convención Constituyente —que se planearía para 1955— tendría una finalidad encubierta: derogar el artículo 40, que dificultaba los contratos con empresas extranjeras²². Coincide Peter Waldmann, para quien todas las medidas tendientes a “secularizar” la sociedad formarían parte de una maniobra “distractiva”²³. Tales opiniones no hacen sino recoger los argumentos que adoptaría por entonces la oposición política: Arturo Frondizi, por ejemplo, en un discurso radial pronunciado el 27/7/55.

Estas explicaciones exigirían, de parte de Perón, una excepcional miopía política, que nunca evidenció. Cuesta creer que pudiera calcular tan mal, pues los efectos resultarían exactamente inversos: el conflicto con la Iglesia se agregaría al problema del petróleo para proporcionar banderas a la oposición —junto con otros argumentos menores— y movilizar en contra del peronismo a extensos sectores de clase media. También influiría decisivamente sobre muchas conciencias militares. Perón conocía suficientemente su país como para subestimar el peso de la religión. Y con mayor razón, conocía la influencia de ese factor en los cuadros del ejército. No puede, pues, pensarse que actuara fríamente con tan poca previsión. Aún cuando una demasia de soberbia, o una excesiva estimación de su poder personal le hiciera creerse inmune, estaban frescos los intentos militares de 1951 y 1952 para recordarle que el disenso existía y no convenía alimentarlo.

Muchos opinantes que siguieron de cerca aquellos sucesos, coinciden en una explicación menos esquemática, pero que parece más lógica: Perón no planificó el conflicto, sino que se vio inmerso en él. Actuó al principio con bastante exasperación, y sin medir las consecuencias de sus actos, ni la dimensión que alcanzarían. Una vez planteado el problema, y tras los primeros ataques de Perón a algunos miembros del clero, el conflicto fue agrandado por las iniciativas de ciertos funcionarios del gobierno. Tal la opinión de José María Rosa, quien dice: “Perón tenía simpatía a la Unión de Estudiantes Secundarios, y el arzobispo de Córdoba había contrapuesto

una Unión de Estudiantes Católicos. Había roces entre ambas entidades, que los enemigos del peronismo —y el arzobispo lo era— se encargaban da magnificar. Perón protestó contra el arzobispo y contra los ‘malos curas’. Y en su entorno de paniaguados corrió la voz: ‘hay que estar contra los curas’... Estoy seguro que Perón ni se dio cuenta, ni atinó a frenar lo que decían sus hombres y sus diputados. A un hombre solo, aislado, se le hace muy difícil gobernar cuando no tiene buenos consejeros”²⁴.

Esa explicación remite una vez más a los prejuicios de la estructura vertical y personalista del peronismo, que además de fomentar la obsecuencia, sobrecargaba al presidente, que ya antes había dado muestras de fatiga y nerviosismo. Es creíble que el exceso de responsabilidades lo abrumara. “Perón ya tenía sesenta años y hacía nueve que era presidente. Quienes lo veían de cerca sabían que era un hombre cansado, con dificultades para concentrarse en los asuntos de Estado. Además, hacía más de dos años que había muerto Evita...” —apunta Robert Potash²⁵.

Justamente, algunos sitúan tras la muerte de Eva, el crecimiento en el peronismo de ciertas tendencias anticlericales. La iniciativa en este sentido, suele adjudicarse al presidente del Consejo Superior —y luego vicepresidente de la Nación— contralmirante Alberto Tesaire —a quien se atribuía filiación masónica— y al ministro de Educación, Armando Méndez San Martín. Este último funcionario —que habría llegado a influir bastante sobre Perón tras la desaparición de Eva— fue el inspirador de buena parte de las medidas laicizantes que formarían parte de la ofensiva contra la Iglesia. Idéntico papel se ha asignado a Raúl Bevacqua, ministro de Salud Pública, que había sido propuesto para ese cargo por Tesaire, en oportunidad de la renuncia del doctor Santiago Carrillo. No habría tenido intervención en esta ofensiva —contrariamente a lo que se ha afirmado frecuentemente— el entonces ministro del Interior, Angel Borlenghi, quien —al igual que otros miembros del gabinete y del partido— consideró que el giro que adoptaban los hechos era perjudicial para el gobierno. Al día siguiente de la reunión de gobernadores celebrada el 10 de noviembre —en la cual Perón lanzó su ataque público contra el clero— Borlenghi se reunió con Gómez Morales y reflexionó sobre el desacuerdo de esa actitud: “Perón realmente ha enfrentado a la Iglesia sin ninguna necesidad; esto en el mejor de los casos no suma, resta”²⁶ —habría dicho el ministro.

Es cierto que gran parte de la comunidad católica

formalmente practicante —concurrente a misa, por ejemplo— como también quienes se enrolaban en la Acción Católica, se reclutaban en las clases medias, prevalentemente antiperonistas. La religiosidad popular, menos atada a la liturgia y al dogma, tenía menos contacto con la Iglesia. De todas maneras, el enfrentamiento produciría en muchos peronistas católicos un problema de conciencia. Volcaría indiferentes en contra del gobierno y aumentaría los argumentos opositores.

Claro que si hubo miopía de parte del gobierno, el conflicto sería alimentado también por el otro protagonista. Las alas extremas de la Iglesia se oponían por igual al peronismo. Desde el catolicismo liberal, el peronismo era totalitario y fascistizante. Para el nacionalismo católico de ultraderecha, no era sino la antesala del marxismo. Unos se erizaban frente a los aspectos nacionalistas del régimen y a su forma autoritaria. Otros ante sus rasgos sociales y populares.

Los grupos de la derecha nacionalista —inclusive algunos intelectuales que antes habían apoyado al peronismo— realizarían una activa propaganda sobre las fuerzas armadas, logrando creciente influencia sobre muchos oficiales jóvenes. Perón y su régimen se convertirían a sus ojos, en una fuerza disolvente que impulsaba la corrupción moral y la secularización de las costumbres. Para los más exaltados, Perón sería una especie de “Anticristo” al que era “obra santa” eliminar. La “cruzada” se difundiría en panfletos y reuniones secretas, e iría prendiendo también en vastos sectores de la clase media.

Uno de los ideólogos de esas posturas, el padre Julio Menvielle, “...cuyos desvaríos fascistas lo harán célebre años más tarde y que entonces tenía mucho predicamento en la Iglesia por su consecuente lucha contra el peronismo...”²⁷, proporcionaría un análisis de particular interés sobre el estado de ánimo y la actitud de las clases medias católicas: “Recién con la persecución religiosa entra en la lucha política argentina una nueva fuerza que es la clase media católica. Es necesario subrayarlo: se trata de una clase distintivamente media, de la cual un porcentaje apreciable acordó su apoyo implícito y aún, en muchos casos explícito, a Perón. Esta clase media es sociológicamente muy matizada. Hay mucho ‘barrio norte’, con ex-alumnos del Champagnat y del Salvador. Pero hay también y principalmente muchos elementos de parroquias populares, como las de la Concepción y de San Cristóbal y aún de los alrededores de Buenos Aires. Componen esta clase empleados, profesionales, universitarios, peque-

ños y medianos industriales y comerciantes. Entran también en ella elementos seleccionados de los sindicatos. Para decir verdad, es ésta una clase que no tiene oportunidad de expresarse políticamente... Esta clase media católica es cada día más numerosa y fuerte y ha cobrado conciencia de su fuerza porque ha logrado mover la calle, que estaba inmovible desde los días de las grandes manifestaciones peronistas. Esta clase media católica que no se sentía interpretada por el radicalismo, mucho menos podía sentirse interpretada por el peronismo”.

El peronismo estaba inmerso en las preocupaciones obreristas. Y el obrerismo todo lo mide en función de sus problemas de ‘trabajo’ o de ‘la seguridad del hogar’ al que destina el fruto de su trabajo. Esta clase media, en cambio, da por resuelto ese problema imprescindible de la seguridad vital. Tiene aspiraciones de cierta libertad y cultura. Sobrepasa en cierto modo el plano de las necesidades económicas y entra en el de la vida civil propiamente dicha, con aspiraciones confusas pero reales al gobierno político... Pudo creer que Perón cumplía lealmente un programa necesario de justicia social. Ciertamente le quedaba la duda sobre si este programa cumplía en el sentido de las prescripciones pontificias o de los preceptos de Marx... “La duda se debía ir disipando en unos más pronto que en otros. Pero con la persecución religiosa desatada por Perón se disipó del todo. Ella tuvo un efecto inconfundible en esta clase media fluctuante entre el peronismo o el antiperonismo. De un solo golpe la sacó de toda duda posible. Esta clase, a la que no se le puede pedir análisis intelectuales o sociológicos, comprendió que el ataque contra la Iglesia era una definición definitiva del carácter espiritual del peronismo: su ‘justicia social’ era materialista”. La lucha de los argentinos salió del plano puramente político en que la había colocado Perón y entró en el plano profundo en que de verdad estaba situada. La Argentina debía seguir siendo católica o debía trocarse en marxista”²⁸.

Lo cierto es que la actitud “en caliente” de Perón, desató por parte de algunos de sus colaboradores una serie de medidas de dudosa oportunidad, que colocaron al gobierno en una encrucijada. Llegado a ese punto, el retorno ya no sería fácil. Cuando el presidente —advirtiendo que las cosas habían ido demasiado lejos— procuró atemperar la situación, halló que quienes de la noche a la mañana se habían enrolado en la “santa cruzada” contra el régimen “impío”, no deseaban desprenderse de una bandera que les era especialmente útil...

- ¹ Scenna, Miguel Angel, "Los Militares", Ed. de Belgrano, Bs. As. 1979, pág. 237.
- ² Potash, Robert, "El Ejército y la Política en la Argentina 1945-1962", Ed. Sudamericana, Bs. As. 1982, pág. 235.
- ³ Lucero, Franklin, "El Precio de la Lealtad", Ed. Propulsión, Bs. As. 1959, pág. 68.
- ⁴ Senén González, Santiago, "Breve Historia del Sindicalismo Argentino", Alzamora Edic., Bs. As. 1974, pág. 79.
- ⁵ *Ibíd.*, pág. 79.
- ⁶ Waldmann, Peter, "El Peronismo 1943-1955", Ed. Sudamericana, Bs. As. 1981, págs. 176-177.
- ⁷ Discurso de Perón, reproducido en "El Pueblo no se Equivoca Nunca", Presidencia de la Nación, Subsecretaría de Informaciones, Bs. As. 1954, pág. 10.
- ⁸ Potash, Robert, op. cit., pág. 225.
- ⁹ Discurso de Perón reproducido en "El Pueblo no se Equivoca Nunca", págs. 36-37.
- ¹⁰ Gómez Morales, Alfredo, citado por Cafiero, Antonio, "Cinco Años Después", Bs. As. 1961, págs. 411-412.
- ¹¹ Sobre el tema, ver opinión de un profesor peronista, en Hernández, Pablo José, "Conversaciones con José María Rosa", Hachette-Colihue, Bs. As. 1978, pág. 124.
- ¹² Ortega y Gasset, José, citado por Hernández Arregui, Juan José en "La Formación de la Conciencia Nacional", Ed. Plus Ultra, Bs. As. 1973, pág. 97.
- ¹³ Ramos, Jorge Abelardo, "Revolución y Contrarrevolución en la Argentina: La Era del Bonapartismo", Ed. Plus Ultra, Bs. As. 1972, págs. 224-225.
- ¹⁴ Godío, Julio, "La Caída de Perón: de Junio a Setiembre de 1955", Granica Editor, Bs. As. 1973, pág. 19.
- ¹⁵ Según lo expresado al autor por Fermín Chavez, en entrevista personal.
- ¹⁶ Según el mismo Fermín Chavez.
- ¹⁷ Godío, Julio, op. cit., págs. 19-20.
- ¹⁸ Perón, Juan D., citado por Confalonieri, Orestes, "Perón contra Perón", Ed. Antyguá, Bs. As. 1956, pág. 229.
- ¹⁹ *Ibíd.*, págs. 290-291.
- ²⁰ *Ibíd.*, pág. 293.
- ²¹ Confalonieri, Orestes, op. cit., pág. 315.
- ²² Ver en Scenna, Miguel A., op. cit., pág. 238.
- ²³ Ver en Waldmann, Peter, op. cit., págs. 240-241.

- ²⁴ Hernández, Pablo José, op. cit., pág. 128.
- ²⁵ Potash, Robert, op. cit., pág. 244.
- ²⁶ *Ibíd.*, pág. 244.
- ²⁷ Godío, Julio, op. cit., pág. 128.
- ²⁸ R.P. Julio Menvielle, citado por Godío en op. cit., págs. 128-129.